DOSSIER
PANDEMOS

REFLEXIONES PARA EL MUNDO POST COVID-19

JULIO 2020

ATENEA

PRESENTACIÓN

Estimada/o amiga/o:

La pandemia del COVID-19 irrumpió en un ya complejo escenario local, regional e internacional, profundizando los desafíos y acelerando los procesos de cambio. Promediando el 2020, las consecuencias del coronavirus ya se perciben con un alcance y profundidad nunca vistas.

A pesar de los matices para cada región y para las diversas áreas que se analice, esta crisis es global: afecta a todos los habitantes de este planeta. Por eso editamos *PANDEMOS* (πάνδημος): un dossier que reúne análisis y reflexiones sobre el mundo del COVID-19, desde un punto de vista latinoamericano y nacional.

Con este proyecto colectivo reafirmamos la necesidad de pensar renovadas miradas propias para las nuevas preguntas que un contexto internacional de alta incertidumbre arroja.

Esperamos resulte de interés,

Jorge Argüello
Presidente
Fundación Embajada Abierta

Marina Salzmann
Directora
Centro de Estudios Atenea

Escriben para esta edición de *PANDEMOS*:

Eduardo de Miguel

Facundo Rodríguez

Tomás Listrani Blanco

Paula Monteserin

Rocío Lafuente Duarte

Ana Capaldi

Jazmín Castaño

Pablo Menéndez Portela

Santiago Hayden

Editorial: Fundación Embajada Abierta

Talcahuano 833 (CP: 1013)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires , Argentina

Esta obra está bajo licencia internacional *Creative Commons* Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0.

ÍNDICE

POR QUÉ ESTE MUNDO FAVORECE AL COVID-19 5

EL ESTADO SE HACE CARGO DE LA CRISIS DEL COVID-19 13

LA AGENDA PENDIENTE QUE DEJARÁ LA PANDEMIA 19

DERECHOS HUMANOS EN TIEMPOS DE COVID-19 26

LA ECONOMÍA GLOBAL POST COVID-19 31

LAS RESPUESTAS DE AMÉRICA LATINA AL COVID-19 40

GÉNEROS Y COVID: LA PROFUNDIZACIÓN DE LA DESIGUALDAD EN LA REGIÓN 48

EL TRABAJO EN CUARENTENA: POLÍTICAS LATINOAMERICANAS FRENTE AL COVID-19 53

LA PANDEMIA: UNA OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 61

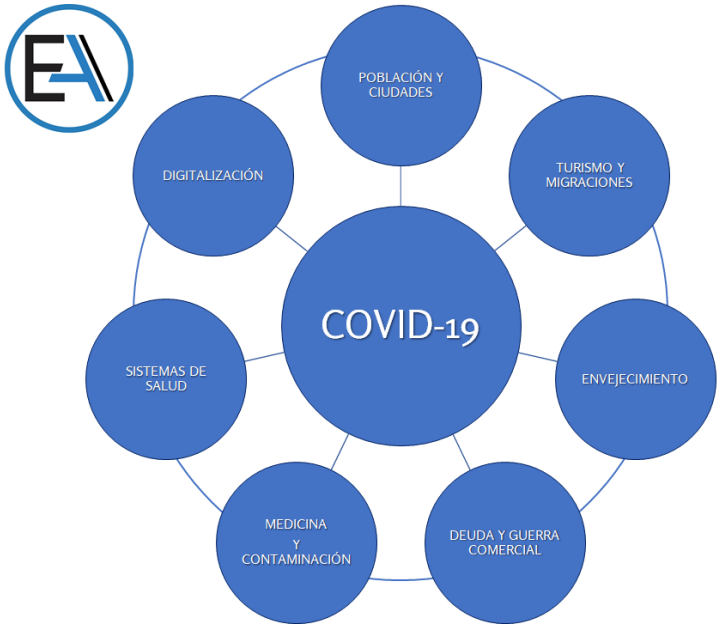
POR QUÉ ESTE MUNDO FAVORECE AL COVID-19

POR QUÉ ESTE MUNDO FAVORECE AL COVID-19

Las pandemias han acompañado el proceso de internacionalización de la economía desde hace siglos, pero el COVID-19 irrumpe en condiciones inéditas de población, urbanización y riesgo ambiental global que combinadas con una crisis de deuda y el sistema multilateral debilitado pueden conllevar consecuencias sin precedentes.

A tres meses del comienzo del brote del COVID-19, el mundo ha cambiado drásticamente. Muchas miradas han puesto el foco en la crisis global desatada por la pandemia, en términos de gobernabilidad. Sin embargo, esta pandemia pasará a la historia, también, por las inéditas condiciones en el que el virus se expandió.

El futuro es incierto y los factores en juego se pueden combinar de distinta manera, pero dependerá de la capacidad de liderazgo de las instituciones de la gobernanza global mitigar la pandemia, reactivar la economía y aprovechar la oportunidad para darle una dirección más sustentable y equitativa al desarrollo en el siglo XXI.



Población y urbes récord

En primer lugar, un virus necesita de un portador. El coronavirus llegó a un mundo poblado y urbanizado como nunca. El crecimiento demográfico en varias partes del globo sigue siendo bastante pronunciado: la población mundial aumentará en 2000 millones de personas para 2050[1]. Solo nueve países representarán más de la mitad de

[1] Véase el reporte de Naciones Unidas, disponible en: https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2019.html

ese crecimiento proyectado por Naciones Unidas: India, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, Etiopía, Tanzania, Indonesia, Egipto y Estados Unidos.

A su vez, el planeta concentra cada vez más población en más ciudades y más grandes. El 55 por ciento de la población mundial vive en zonas urbanas, una proporción que llegará a 68 por ciento para el año 2050, según estima la ONU[2].

Desde urbanización planificada del Sudeste Asiático a las megalópolis del África Subsahariana, pasando por los todavía crecientes conurbanos de las economías desarrolladas, cada año el mundo adopta más las lógicas urbanas. En el siglo XXI las ciudades siguen traccionando población en busca de mejor calidad de vida y acceso a recursos. Sólo Argentina tiene el 90% de su población viviendo en ciudades, pero el 80% se concentra en sólo el 2% de las urbes[3]. Mientras tanto, se contabilizan 2 mil municipios con menos de mil ciudadanos.

Precisamente, ese peso de las ciudades en el plano económico refleja una economía mundial que ya no depende sólo de países o regiones sino que pasa crecientemente por las ciudades, en empleo, negocios y actividad económica. Y eso también tiene sus correlatos políticos, sea en la paradiplomacia de las principales capitales del mundo o en duplas de "ciudades hermanas" que estrechan lazos de cooperación en ciencia, finanzas y servicios.

El curso de esta pandemia está poniendo en evidencia que las actuales sociedades, tan urbanizadas, necesitan redes de protección para hacer frente a una hiperglobalización que las deja expuestas, para soportar sus embates y para responder con eficacia. En ese contexto, las grandes ciudades están siendo para los dirigentes políticos el mayor desafío de administración -y salud- pública.

Alta circulación

Un virus también se esparce mejor con alta circulación. Esa población mundial, numerosa y urbanizada a niveles inéditos, en 2020 es capaz de desplazarse en grandes contingentes y rápidamente a través de largas distancias.

Por un lado, el turismo internacional está en un récord histórico, con 1.400 millones de viajeros en 2018 y creciendo a un ritmo del 6 por ciento anual[4]. ¿Y cuáles son los cinco

[2] Véase la revisión reciente del Reporte de Urbanización Mundial, disponible en: https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Report.pdf

[3] Véase la nota publicada en El Estadista 28/03/2019, disponible en: https://www.elestadista.com.ar/?p=15313

[4] Véase el reporte de la Organización Mundial del Turismo, disponible en: https://www.unwto.org/es/press-release/2019-01-21/las-llegadas-de-turistas-internacionales-suman-1400-millones-dos-anos-antes

países con más arribos de turistas internacionales? Francia, España, Estados Unidos, China e Italia, los países que lideraron el primer trimestre de 2020 en número de contagios.

Por el otro, las migraciones son una característica intrínseca de nuestro mundo cada vez más globalizado. Hasta fines de 2019, según la ONU, el número de migrantes alcanzó la cifra de 272 millones, 51 millones más que en 2010. Los migrantes internacionales comprenden un 3,5% de la población mundial, cifra que continúa en tendencia ascendente comparándola con el 2,8% de 2000 y el 2,3% de 1980[5].

Ambos desplazamientos tienen fuertes impactos monetarios. Mientras que el turismo supera las alicaídas tasas de crecimiento económico mundial, y explican buena parte del PBI de muchos países (y, más aún, de sus grandes ciudades), existen evidencias contundentes que vinculan a las migraciones con la estabilidad económica, sobre todo en países en vías de desarrollo. Tanto el turismo como las migraciones mejoran significativamente la posición en el país de destino, en temas como la cuenta corriente y el nivel general de ahorro, por ejemplo.

Envejecimiento

Esta pandemia afecta especialmente a los adultos mayores. Según las Perspectivas de la Población Mundial 2019 de la ONU, 1 de cada 6 personas en el mundo será mayor de 65 años para 2050, frente a 1 de cada 11 en 2019. De hecho, el año pasado ya hubo más gente en el mundo mayor de 65 años que menor de 5 por primera vez en la historia.

Uno de los datos más contundentes en términos sociales es que las sociedades atraviesan una "revolución de la longevidad. Algunas están en sus etapas iniciales y otras, más avanzadas, pero todas pasarán por esta extraordinaria transición. En los países con mayor esperanza de vida la posibilidad de sobrevivir a la edad de 65 años aumentó de menos del 50% -como Suecia en 1890- a más de 90%.

Las personas de tercera edad representan hoy en día más de una quinta parte de la población en 17 países, y las proyecciones de la ONU para el final del siglo indican que así será en 2100 para 155 países, que abarcan una mayoría (61%) de la población mundial[6]. Estas nuevas sociedades longevas plantean serios desafíos de estabilidad económica -y en consecuencia política- para los gobiernos.

En particular, la Europa con la que se ha ensañado el COVID-19 está envejeciendo. En 1950, sólo el 12% de la población europea tenía más de 65 años. Las bajas tasas de

[5] Véanse datos de Naciones Unidas, disponibles en: https://news.un.org/es/story/2019/09/1462242

[6] Véase el reporte Envejecimiento Poblacional Mundial, disponible en: https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2019-Highlights.pdf

natalidad y el aumento de la esperanza de vida duplicaron esa proporción para la actualidad, y las proyecciones muestran que en 2050 más del 36% de la población europea tendrá más de 65 años.

Deuda y guerra comercial

El mundo no termina de salir de la crisis financiera de 2008 ni de la guerra comercial desatada en 2018 entre las dos grandes potencias globales (EEUU y China), cuando la pandemia del COVID le impone una recesión de escalas sin precedentes y en tiempos récord, apenas unas pocas semanas en que la actividad y el comercio se frenaron de golpe. Ni en la Gran Depresión de 1930 ni el la II Guerra Mundial había ocurrido eso.

Desde 1930, las economías avanzadas y emergentes no han experimentado la combinación de un colapso del comercio mundial, la caída de los precios mundiales de los productos básicos y una recesión económica simultánea.

El COVID-19 irrumpe en un mundo muy distinto. Los grandes bancos centrales tienen menos herramientas de rescate (esta vez la banca no es el problema sino la economía real). Y los Estados se ven empujados a masivas políticas de subsidios cuando están atrapados por un endeudamiento que supera dos veces el PIB global.

Tras ocho años del aumento de deuda más grande, rápido y generalizado en casi cinco décadas, el endeudamiento de las economías emergentes y en desarrollo aumentó hasta un máximo histórico de casi 170% de su PIB en 2018. La deuda total global (pública y privada) ascendía a fines de 2019 a un récord histórico de USD 188 billones, equivalentes al 230 por ciento del PIB global[7].

Eso explica que el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se hayan unido para pedir a los prestamistas bilaterales que suspendan el pago de deuda de países en desarrollo y más pobres, para facilitar liquidez y liberar recursos para afrontar la pandemia. Hace falta "una sensación global de alivio", dijeron.

[7] Véase boletín de Europa Press 07/11/2019, disponible en: https://www.europapress.es/economia/noticia-deuda-global-escala-170-billones-230-pib-mundial-fmi-20191107175445.html

Bajas defensas, cambio climático

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) diagnosticó en 2019[8]:

"*El mundo se enfrentará a otra pandemia de influenza, lo único que no sabemos es cuándo llegará y cuán grave será. Las defensas globales son tan efectivas como el eslabón más débil del sistema de preparación y respuesta ante emergencias sanitarias de cualquier país*".

La OMS hizo notar ya que más de 1.600 millones de personas (22% de la población mundial) vivía en lugares donde las crisis prolongadas (a través de una combinación de desafíos como la sequía, el hambre, los conflictos y el desplazamiento de la población) y los servicios de salud débiles los dejan sin acceso a la atención básica.

Nueve de cada diez personas respiran aire contaminado. La OMS considera la contaminación del aire el mayor riesgo ambiental para la salud global. Los contaminantes pueden penetrar los sistemas respiratorios y circulatorios: de hecho, ya matan a siete millones de personas prematuramente cada año.

Para rematar, el cambio climático se convirtió en "la mayor y más completa amenaza para la seguridad sanitaria mundial", según la OMS. Los mosquitos son solo una parte del desafío, pero después del brote de zika en Brasil en 2015, "estamos especialmente preocupados por lo que viene después", sintetizó uno de sus expertos apenas meses atrás.

En ese contexto, si bien el desarrollo de antibióticos, antivirales y antimaláricos son algunos de los mayores éxitos de la medicina moderna, "el tiempo de estos medicamentos se está acabando. La resistencia a los antimicrobianos (la capacidad de las bacterias, parásitos, virus y hongos para resistir estos medicamentos) amenaza con volver al momento en que no se podían tratar fácilmente infecciones como la neumonía, la tuberculosis, la gonorrea y la salmonelosis".

Ese panorama se completa con la falta de instalaciones adecuadas de atención primaria de salud -por falta de recursos o su inversión en programas específicos para enfermedades únicas- y, a la vez, una renuencia o rechazo a vacunarse a pesar de la disponibilidad de vacunas, sobre todo en países desarrollados.

Virus globalizado, salud nacionalizada

La crisis del COVID-19 comenzó en China, con el resto de los países observando un fenómeno lejano y casi extraño. La respuesta fue nacional, con un confinamiento de 12 millones de personas inédito para contener el foco original de Wuhan, en febrero, pero

[8] Véase la publicación completa de la OMS, disponible en: https://www.who.int/news-room/feature-stories/ten-threats-to-global-health-in-2019

para entonces el virus ya se estaba globalizando y hasta la OMS tardó varias semanas en declararlo "pandemia".

El proceso político des-globalizador, fogoneado por potencias como Estados Unidos y Gran Bretaña, debilitó un sistema multilateral de por sí desdibujado pero clave en las pandemias, cuando el indiscutible valor de la soberanía política necesita reajustarse en favor del bienestar de la Humanidad, amenazado por esa y otras problemáticas que saltan todas las fronteras, empezando por el cambio climático.

Ahora, cada país ha ido reaccionando con una estrategia sanitaria propia ante la pandemia, en primer lugar con el cierre de fronteras cayendo como fichas de un dominó por todo el planeta. El latiguillo de "virus chino", preferido por Donald J. Trump, sintetiza ese enfoque. Pero como expuso ante el G20 el presidente argentino, Alberto Fernández, ante esta crisis "nadie se salva solo".

Recién a finales de marzo, la OMS puso en marcha un programa experimental de urgencia en diez países, entre ellos la Argentina, para probar cuanto antes la eficacia de distintas drogas ya conocidas en la lucha contra el COVID-19. Pero cada país (Holanda, España, Estados Unidos o Brasil) mantenía estrategias diferentes.

Por ello, el mundo necesita ahora, sin embargo, repensar la inversión en recursos humanos y estructuras de salud pública -un pilar del Estado de bienestar tan apreciado en el Siglo XX- si quiere darle sentido al concepto de "salud global", acuñado con el nacimiento del multilateralismo pero aun pendiente de realización.

La digitalización, salvavidas o más control

La actual pandemia ocurre en un mundo digitalizado como nunca, gracias a la multiplicación de dispositivos electrónicos y el acceso a Internet. En 2008 la cantidad de dispositivos móviles con conexión superó a la población mundial.

El fácil acceso a la red y la exponencial cantidad de información que por ella circula llevaron a las compañías a ofrecer sus productos y servicios, e incluso a operar, de forma virtual. Este cambio radical en la manera en la que se produce se ha denominado *ubicuidad*: poder ser un trabajador o usuario manera descentralizada y desde cualquier lugar con una conexión estable.

Para los gobiernos, la digitalización ha permitido una comunicación de prevención que llegue a todos. Además, el trabajo a distancia (teletrabajo) amortizará, aunque sea mínimamente, la desaceleración económica en cada país. Lo mismo ocurre en el plano pedagógico, donde el sistema educativo mundial desde las escuelas primarias hasta las universidades giró hacia la virtualidad para sostener el ciclo lectivo.

Para los médicos e investigadores, las tecnologías digitales y el Big Data y la Inteligencia Artificial (IA) son herramientas que potencia la lucha contra el COVID-19,

como los casos asiáticos de China, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Singapur han demostrado.

No obstante, peligros futuros se esconden detrás de la digitalización en masa. Mecanismos cada vez más sofisticados podrían permitir monitorear individualmente y en tiempo real la actividad de los ciudadanos. Este mayor control podría traducirse desde mayor intromisión de los empleadores a una actitud más policial del Estado en la vida diaria.

Se ha comprobado que el avance tecnológico no solo mejora la capacidad de una sociedad civil para organizarse: también los autoritarismos se adaptan a ese cambio y lo utilizan para para elucubrar formas más sofisticadas de violaciones a los derechos humanos. En el caso de las democracias consolidadas, como ha ocurrido a partir de otras crisis como el 11-S en Estados Unidos, algunas medidas contingentes pueden quedar fijas en legislación permanentemente.

EL ESTADO SE HACE CARGO DE LA CRISIS DEL COVID-19

EL ESTADO SE HACE CARGO DE LA CRISIS DEL COVID-19

La partícula del Coronavirus, el *virion*, es un millón de veces más pequeña que las células del pulmón humano que infecta, pero su expansión en forma de pandemia provoca estragos económicos y sociales globales que obligó a los Estados a dar un paso al frente y hacerse cargo de la crisis, como ocurrió otras veces en la Historia moderna, la última en 2008.

Durante las últimas cuatro décadas, incluyendo países como China, donde justamente comenzó la pandemia, el neoliberalismo guió la expansión del capitalismo y la globalización del comercio y la economía, pero sus principios vuelven a demostrarse estériles y hasta perjudiciales para una gobernanza mínima del planeta ante crisis sistémicas.

Las anteriores coyunturas críticas para el planeta, desde los inicios de la globalización, se relacionaron estrictamente con factores económicos, y especialmente financieros, como a fines de los 90 y desde 2008, y aún así disparó la intervención de los Estados de las grandes potencias y bloques, además de la creación de instancias de gobernanza mundial, como el Grupo de los 20 (G20), cuya cumbre de 2020 está citada en Riad (Arabia Saudita).

La emergencia planetaria abierta en sólo unas semanas de 2020 por la expansión del coronavirus, la peor desde la II Guerra Mundial según la canciller alemana Angela Merkel, desde su primer foco en la ciudad de Wuhan (Hubei), ha provocado reacciones contra-globalización como el cierre generalizado de fronteras. Se siembran grandes interrogantes sobre el futuro de un mundo tan interconectado en todos los sentidos, como lo fue hasta 2019.

Al mismo tiempo, la emergencia es de tal magnitud que plantea forzosamente un nueva dimensión de exigencia para la acción coordinada desde los Estados, a tal punto que naciones que hacen del capitalismo privado una base indiscutible de su organización social se disponen ahora a legitimar una intervención económica estatal sin precedentes, que llega hasta el extremo de distribuir dinero en efectivo, como en Estados Unidos.

A continuación, resumimos las principales iniciativas políticas -anunciadas y en estudio- para que el Estado salga en ayuda, principalmente financiera, de los sistemas productivos nacionales cuyos bastiones privados hoy colapsan por la caída generalizada de la demanda y pone en riesgo el equivalente a más de 300 millones de empleos, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT)[9].

[9] Véase el reporte del Monitor de la OIT, disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_745963.pdf

A inyectar dinero

Muchos gobiernos cuyo sello era el equilibrio fiscal o la compensación del gasto público dieron un vuelco de manera decidida hacia importantes gastos extraordinarios. En España el gobierno de Pedro Sánchez movilizó €200 mil millones (117 mil millones sólo el fisco)[10], el equivalente a lo que toda la Unión Europea en la crisis de la eurozona desatada en 2008 y cerca de una quinta parte del PIB español.

Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron dispuso de €300 mil millones[11], equivalente a más del 13% del PBI francés. La Alemania de Angela Merkel, que ya diseña un paquete de estímulo económico que representa casi un sexto de su economía actual, autorizó a su principal banco estatal, KfW, a prestar hasta 610 mil millones de dólares a empresas para amortiguar los efectos del coronavirus[12]. El Reino Unido anunció una inyección de más de €360 mil millones[13] (15% del PIB) y Brasil USD 29.100 millones[14].

Por su parte, los gobiernos de Japón, Canadá y el Reino Unido lanzaron una serie de iniciativas de política monetaria para sostener la actividad financiera luego de semanas de caída y protegerla de los shocks externos con "capitales de reserva contracíclicos".

En otros casos se hizo foco en la producción y lo social: los gobiernos de Australia, Italia y Corea del Sur, entre otros, tomaron diversas medidas para aliviar las consecuencias para las pequeñas y medianas empresas, autorizaron depósitos extraordinarios a los jubilados o pusieron en marcha planes de capacitación para quienes hayan perdido sus trabajos.

El propio gobierno argentino, en una maniobra más previsora que muchos países del hemisferio norte, suspendió las clases e implementó la cuarentena para intentar ralentizar los contagios. Las diferentes medidas fiscales anunciadas por el presidente Alberto Fernández representan el varios puntos del PBI argentino, por delante de otros países mucho más afectados como Italia.

[10] Véase el artículo publicado por El País 17/03/2020, disponible en: https://elpais.com/economia/2020-03-17/el-gobierno-aprobara-una-moratoria-para-el-pago-de-hipotecas.html

[11] Véase la cadena oficial 16/03/2020 disponible en: https://www.bfmtv.com/politique/emmanuel-macron-annonce-une-garantie-de-l-etat-a-hauteur-de-300-milliards-d-euros-pour-les-prets-bancaires-des-entreprises_VN-202003160248.html

[12] Véase el anuncio reproducido por France24 13/03/2020, disponible en: https://www.france24.com/en/20200313-germany-unleashes-biggest-post-war-aid-package-against-virus

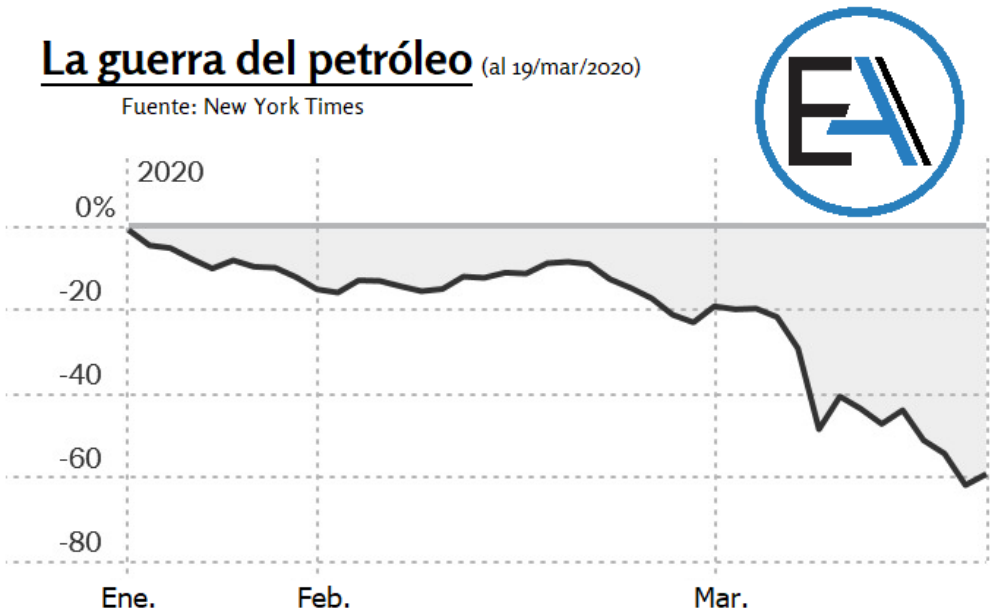
[13] Véase el artículo publicado por The Irish Times 17/03/2020, disponible en: https://www.irishtimes.com/news/world/uk/british-government-announces-business-aid-package-worth-360-billion-1.4205369

[14] Véase el artículo publicado por El Nuevo Herald 16/03/2020, disponible en: https://www.elnuevoherald.com/ultimas-noticias/article241250566.html

La respuesta del gobierno federal estadounidense sorprendió a varios por su amplitud y fondos. El presidente Donald Trump preparó un mega paquete de medidas que movería un billón de dólares, de los cuales la mitad (casi 500 mil millones) los destinó a depósitos directos a los bolsillos de los ciudadanos norteamericanos[15].

Para poner las cosas en perspectiva, el rescate bancario de 2008 fue de USD 700 mil millones, mientras que la Ley de Reinversión y Recuperación (*Recovery Act*) de 2009 llegó a USD 800 mil millones.

La Administración Trump decidió ir más lejos. Ante la baja del precio del petróleo y las bolsas internacionales, diseñó la Ley en Defensa de la Producción. El proyecto autoriza al gobierno federal a intervenir el sector privado para asegurar la provisión de insumos y bienes esenciales para el funcionamiento de la economía nacional.



Por su parte, la Reserva Federal, que ya había bajado las tasas de interés a prácticamente cero, relanzó una medida utilizada durante la Gran Recesión de la década pasada que le permite sostener al sector privado a través de la compra de pequeños instrumentos de deuda de corto plazo que las compañías norteamericanas emitan.

Los ejemplos son contundentes: el Estado salió, por fin, a la carga contra el caos generado por el coronavirus. Esta pandemia ocurre en un mundo con una masividad de los medios de comunicación, importante digitalización de la economía e impresionante velocidad de circulación de la información tanto por canales oficiales como por redes sociales. ¿Qué significa para los gobiernos y para las relaciones internacionales?

[15] Véase el artículo publicado por Washington Post 24/04/2020, disponible en:

https://www.washingtonpost.com/business/on-small-business/trump-signs-484-billion-package-to-rescue-small-businesses/2020/04/24/18b10e10-864b-11ea-81a3-9690c9881111_story.html

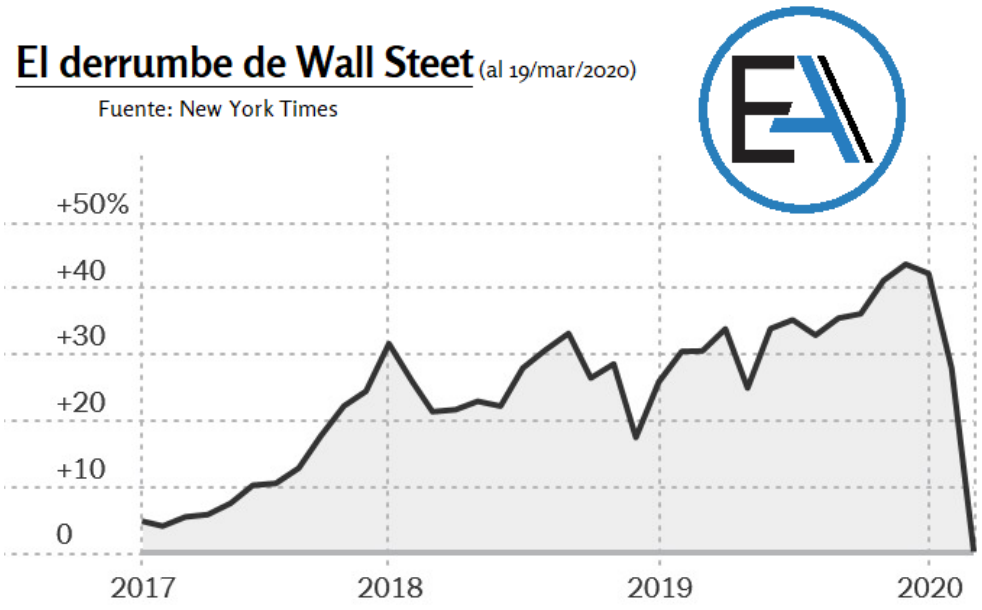
La política, puesta a prueba

En primer lugar, la crisis desatada por el COVID-19 supone un desafío de gobernabilidad enorme, que pone a prueba a las instituciones y los relatos construidos por los mandatarios.

La reciente coalición entre PSOE-UP en España experimentó fuertes tensiones por los diferentes cursos de acción que los miembros de la alianza creían que debía seguir España. En Israel, la situación de emergencia ayudó al presidente Reuven Rivlin a justificar encargarle al opositor Benny Gantz la formación de un gobierno en vez de al actual primer ministro Benjamín Netanyahu, quien enfrenta un proceso judicial. En Italia, el presidente Sergio Mattarella tuvo que extender la cuarentena a toda Italia siguiendo las presiones del radical Matteo Salvini, incluso cuando este ya no es ministro del Interior.

Estos tres casos muestran cómo en situaciones límite ciertas figuras que en situaciones de normalidad tienen un papel secundario se convierten en piezas decisivas para la estabilidad política.

Como en todo episodio crítico, lo simbólico es tan importante como lo real. Donald Trump había convertido el alza del mercado de valores en el principal indicador de su gestión económica. Ante el pánico bursátil, el mandatario que comenzó su presidencia con fuertes recortes de gasto público se muestra dispuesto a niveles de intervención del gobierno federal impensados meses atrás.



En el Reino Unido que atraviesa todavía el proceso de Brexit, el primer ministro Boris Johnson buscó diferenciarse del discurso de la Unión Europea. Desde que era candidato del partido conservador, Johnson insistió en un manejo racional del gobierno: si él llegaba al poder, su parlamento tomaría decisiones siempre basado en evidencias concretas.

Sin embargo, el primer ministro condujo su estrategia con falta de tacto político: comenzó asegurando que lo mejor era el contagio masivo; hoy activa restricciones para evitar un colapso del sistema de salud pública británico (NHS). ¿Cómo impactará la entereza con la que conduzca al Reino Unido en esta crisis en las negociaciones post-Brexit con Bruselas?

Por otro lado, el Japón de Shinzo Abe mantuvo por mucho tiempo la voluntad de organizar los juegos olímpicos. A comienzos de año, cuando todas las miradas apuntaban a la expansión del virus en China, Abe vio en Tokio 2020 otra oportunidad para mostrar a un país eficiente y orgulloso a la opinión pública internacional. El primer ministro japonés con más tiempo en el poder que quería que el evento deportivo se convirtiera en la culminación de su carrera política corrió hasta último minuto el riesgo de auspiciar unos juegos olímpicos más vacíos que Moscú 1980.

Un mundo "glocal"

Más allá de cada país, el coronavirus puede arrojar algunas claves valiosas en el terreno de la política internacional. En primer lugar, las medidas gubernamentales muestran el rol central que siguen jugando los Estados como actores principales. En este contexto, las ONG, las compañías multinacionales y los organismos internacionales son en esencia insuficientes para combatir la pandemia.

En segundo lugar, se siguen mostrando los recaudos que deben tomarse frente a la hiperglobalización actual. En un mundo interdependiente sin adecuados controles gubernamentales, los "contagios" financieros, logísticos e informáticos son inevitables y traumáticos: no sólo los países no pueden evitar verse afectados, sino que además una vez heridos las medidas que pueden tomar exceden el límite de lo que cualquier Estado, grande o pequeño, puede lograr.

En tercer lugar, consagra al siglo XXI como aquel de los conflictos "glocales" (aquellos que combinan lo global y lo local a la vez). Los flujos transfronterizos y la distribución de la producción mundial potencian el impacto y duración de fenómenos que desconocen fronteras, lo que podría motivar un mayor "realismo comunitario": la aceptación de coordinación internacional ante amenazas comunes, más allá de toda rivalidad. Con una pandemia, las decisiones de país cuentan para evitar que el virus se propague o mute, poniendo en riesgo al planeta entero.

En cuarto lugar, el coronavirus exige todavía mayor flexibilidad a un esclerótico sistema multilateral global. La convocatoria a una Cumbre Virtual de Líderes del G20 por parte de Arabia Saudita, anfitrión 2020, es un ejemplo de la necesidad ineludible de adaptación a las cambiantes circunstancias del tablero mundial.

LA AGENDA PENDIENTE QUE DEJARÁ LA PANDEMIA

LA AGENDA PENDIENTE QUE DEJARÁ LA PANDEMIA

La pandemia del COVID-19 que irrumpió a fines de 2019 atravesó el mundo de Este a Oeste transformándolo en muchos sentidos, pero cuando pase la emergencia sus líderes tendrán que volver a lidiar con la agenda de asuntos y problemas pendientes, desde la guerra comercial hasta las migraciones, pasando por la reformulación de la Unión Europea y las crisis institucionales en América Latina.

Ciertamente, una vez controlada la pandemia, aun cuando el planeta demore en lograrlo (falta saber cómo impactará en partes de Asia, América Latina y África), la crisis habrá dejado una herida sin precedentes en la economía mundial, de una magnitud superior a la que provocaron las guerras y depresiones del Siglo XX.

A diario leemos decenas de análisis que adelantan cómo esta ola de recesiones y desempleo, tanto en países desarrollados como emergentes, grandes o pequeños, cambiará muchos paradigmas en la gestión de todas las economías, así como en el tratamiento de otros problemas estructurales, en especial la salud pública.

La intervención, en escala y características, de muchos bancos centrales y tesoros nacionales para contener semejante daño, son un anticipo del mundo que vendrá. Otros aspectos, como la sustentabilidad de la actividad productiva y comercial, tal vez merezcan una reformulación total y logren mejorar el planeta.

Sin embargo, aunque esta crisis modifique muchas formas de pensar, abordar y gestionar el mundo post COVID-19, algunos grandes asuntos de política internacional seguirán allí, vigentes y esperando una definición definitiva.

Es una incógnita, por ahora, si la experiencia de la pandemia mejorará o empeorará la capacidad de gobernanza global, que ya estaba en cuestión en 2019. O si se apreciará el multilateralismo o se acentuará el aislacionismo. Es decir, si se comprenderá, al fin, que "nadie se salva solo", como suele decir Francisco.

Como sea, conviene hoy tener presente una lista básica de los pendientes que el mundo dejó congelados en su agenda cuando el COVID-19 comenzó a dispersarse desde China, porque la misma subvaloración que mereció entonces puede traer males mayores si la merecen, ahora, este conjunto de asuntos que sigue aquí:

Guerra comercial

El presidente Donald J. Trump había cerrado en enero pasado la *Fase 1* de acuerdos comerciales con su par Xi Jinping, en el fondo una tregua entre Estados Unidos y China, al cabo de una guerra de aranceles abierta en 2018 por Washington que implicaba cientos de miles de millones de dólares por ambas partes y que se extendió a Europa y las Américas.

Lo que debía seguir en 2020 era la *Fase 2*, una discusión de fondo que involucraría el sensible asunto de las patentes y la tecnología. Sin embargo, la pandemia puso en suspenso ese proceso y ahora, sus consecuencias económicas globales, en especial en Estados Unidos, puede terminar abortándolo.

La recesión en que cayó China en el primer trimestre de 2020 impactó en su protagonismo comercial global y, por tanto, en la actividad de muchos países dependientes de sus compras. Pero la salida de la pandemia vuelve a posicionar a Beijing en la negociación con Washington. Por el contrario, Trump se ve debilitado para continuar las negociaciones por una crisis sin precedentes.

Con una estimación provisoria de hasta 32% de contracción del comercio global en 2020 (OMC)[16], La caída del precio del petróleo y de los commodities en general confirman renovadas tensiones que generalice la guerra comercial, salvo que, con nuevos actores, el mundo reedite el espíritu de acuerdos del siglo pasado y recupere el multilateralismo desafiado y amenazado en los últimos tiempos.

Elecciones en EEUU

Hasta enero, toda la atención en el proceso de primarias de Estados Unidos estaba puesta en el campo demócrata, con la disputa entre los dos principales candidatos, el ex vicepresidente Joe Biden -con una ventaja decisiva de delegados en la disputa interna- y su contrincante el senador Bernie Sanders, decidido a imponer hasta el fin de la contienda una agenda progresista más radical. El retiro de Sanders, en plena crisis, dejó a Biden como candidato y la disputa ideológica de fondo, abierta.

Mientras tanto, el presidente Donald J. Trump iniciaba su campaña por la reelección, casi sin adversarios y sustentado en la boyante situación económica del país, en los nuevos acuerdos comerciales para frenar la expansión de China y en índices -hasta allí- históricamente bajos de desempleo.

El COVID-19 está sacudiendo la economía estadounidense de tal manera que puede voltear completamente el curso de la campaña. Aunque ya fuera de carrera, Sanders puede imponer las propuestas más audaces, en términos de intervención del Estado, impuestos, salario mínimo y sistema de salud pública. A su vez, Trump perderá gran parte de la ventaja proselitista y, a la vez, será básicamente juzgado por su gestión, hasta ahora deficitaria, de la crisis del COVID-19.

[16] Véase el comunicado oficial 08/04/2020, disponible en: https://www.wto.org/spanish/news_s/pres20_s/pr855_s.htm

Las crisis en América Latina

En plena propagación de la pandemia, Estados Unidos sorprendió ofreciendo una recompensa millonaria por la captura de Nicolás Maduro por la presunta comisión de delitos de narcotráfico y desplegó una fuerza aeronaval en torno de Venezuela, una ofensiva que encuentra a las organizaciones regionales en un momento de dispersión y mínima coordinación frente a las diversas crisis institucionales.

Simultáneamente, la Administración Trump ofreció una salida propia a la crisis: organizar un gobierno de "transición democrática" sin Maduro ni el opositor autoproclamado presidente Juan Guaidó y un posterior llamado a elecciones. La propuesta ratifica la gran importancia que Washington sigue prestando a la crisis institucional en el país caribeño.

Asimismo, la pandemia llevó al gobierno provisional en Bolivia a decidir la postergación de las elecciones generales que deberían devolver la normalidad democrática al país para septiembre de 2020. Poco antes, se habían definido los candidatos, tanto el opositor Luis Arce, del partido del expresidente Evo Morales (2006-2019), como la propia mandataria a cargo, la senadora Jeanine Áñez, y otros aspirantes de derecha.

Por último, también Chile vio alterado totalmente su calendario original para abrir el proceso para reforma la Constitución anunciado a finales de 2019 por el presidente Sebastián Piñera. El gobierno y la oposición acordaron postergar el referendo inicial del proceso, fijado para el 26 de abril, al 25 de octubre.

La concreción del Brexit

Otro proceso pendiente a pesar de la pandemia es el Brexit. Tras la caída de dos gobiernos y tres años de incertidumbre, el 31 de enero pasado el Reino Unido dejó la Unión Europea (UE) tras casi medio siglo. Sin embargo, todavía queda por definir el futuro de la relación entre Londres y Bruselas.

Para ello, el gobierno del conservador Boris Johnson incurrió en una riesgosa estrategia: "atarse" al límite del 31 de diciembre para finiquitar la desconexión con la UE. Johnson pretendía aprovechar así 2020 como una transición: el Reino Unido no forma parte de las instituciones europeas ni se somete a nuevas decisiones, mientras disfruta de beneficios económicos y de circulación del mercado único.

Un mes más tarde, la pandemia del COVID-19 obligó a los políticos de ambos lados del Canal de la Mancha a concentrarse en sus situaciones domésticas. Hasta la fecha, el gobierno conservador sigue comprometido con las negociaciones de Brexit tratando de mantener el plazo que Londres se fijó a sí misma, a pesar de que el brote de coronavirus ha discontinuado abruptamente las conversaciones.

El Reino Unido y la UE tienen hasta el final de este año para discutir un acuerdo de libre comercio que necesariamente será complejo por el volumen y la densidad de los intercambios económicos entre ambos mercados. Sin acuerdo, los británicos pasarán automáticamente a comerciar con los términos de la Organización Mundial del Comercio (OMC): los aranceles serán más altos dañando aún más las alicaídas economías del Reino Unido y el bloque comunitario por los efectos del COVID-19.

El futuro de la UE

Mientras que los gobiernos de toda Europa combaten desesperadamente el COVID-19, las mentes en Bruselas se dirigen a los planes de contingencia para el Marco Financiero Multianual (MFF), el próximo presupuesto de siete años de la UE (2021-2027) que debe ejecutarse desde el comienzo del próximo año.

Si bien las negociaciones sobre el nuevo presupuesto empezaron en 2019, la UE debió darle prioridad a la pandemia. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anunció un Plan de Recuperación para Europa por casi 1,3 billones de euros (equivalente a más de diez Planes Marshall, el histórico programa de reconstrucción de la segunda posguerra) diseñada para ayudar a mantener las finanzas a flote durante la crisis del coronavirus. A ello le sumó la tratativa de un esquema comunitario de 100 mil millones de euros para combatir el desempleo que la recesión del COVID-19 producirá en el corto plazo.

Si negociaciones presupuestarias son siempre muy difíciles en tiempos normales, ahora, con los gobiernos enfrentándose a emergencias sanitarias y económicas de gran calibre, las posibilidades de que los Estados miembros aprueben el MFF tal y como estaba en los borradores de 2019 son escasas. De hecho, hace varios meses que la UE no discute en una cumbre el nuevo presupuesto.

Alemania ocupará la presidencia del Consejo de la UE durante seis meses a partir de julio. Los tecnócratas de Bruselas apuestan a ese momento para tener listos varios "Planes B" que contemplen diferentes escenarios de gravedad a partir de los efectos del COVID-19.

Con todo, la pugna por el presupuesto ya comenzó. Se vislumbran dos bandos: por un lado, los "frugales" como Alemania y Países Bajos, quienes buscan una reducción del MFF a su mínima expresión. Por el otro, los "solidarios" como España e Italia, quienes esgrimen que sin fondos generosos desde Bruselas muchos proyectos de desarrollo quedarán a medio camino, poniendo en serio riesgo el crecimiento del bloque en su conjunto. En las discusiones quedan cada vez más de lado programas más ambiciosos como fondos especiales para refugiados o un Pacto Verde de descarbonización acelerada de la UE.

¿Qué pasará si no se llega a un acuerdo para fin de año? Según las leyes de la UE, la Comisión tiene la potestad de extender el presupuesto un año más (ya sea mes a mes o por doce meses completos). Eso esconde sus riesgos: significa que los 27 miembros deberían costear un presupuesto 2021 del mismo tamaño que el de 2020, pero ahora sin la significativa contribución del Reino Unido. Sin las arcas de Londres, el próximo MFF se ve potencialmente privado de 75.000 millones de euros.

La crisis en Siria

A medida que la pandemia reordena rápidamente las prioridades de los responsables políticos y del público en todo el mundo, los conflictos armados que ocupaban el centro del debate político y mediático van pasando a un segundo plano. La crisis en Siria y la lucha contra el Estado Islámico (ISIS) no son la excepción.

El conflicto de Siria desde 2011 es una constelación de crisis superpuestas. Casi una década después de las primeras protestas contra Bashar al-Assad, hoy el gobierno sirio retiene el control de la mayor parte del país. Esto no ha sido sin costos: las distintas dimensiones mundiales, regionales y locales de la crisis condujeron a una violencia crónica y la muerte de más de 380.000 personas[17], alimentando la radicalización, la huida de refugiados y una economía de guerra.

El conflicto armado atrajo primero la intervención internacional contra el islamismo radical del ISIS y luego la injerencia de jugadores como Rusia, Turquía e Irán, que siguen explotando la inestabilidad a su favor. La ofensiva de este año sobre Idlib -último bastión de la resistencia siria- parece sellar la victoria de al-Assad.

Recientemente el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y su par ruso Vladimir Putin acordaron poner fin a las hostilidades en Idlib a lo largo de las actuales líneas de frente y permitir que las fuerzas del régimen sirio mantuvieran el control de las áreas tomadas durante las ofensivas en febrero y permanecieran a una distancia de ataque de la ciudad rebelde. Ahora, mientras Erdogan y Putin se concentran en las consecuencias domésticas del COVID-19, queda pendiente la estabilización de las zonas arrasadas por la guerra civil y la cuestión de los refugiados.

Más aún, el ISIS sigue operativo en la región. El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, llamó a un "alto el fuego mundial" argumentando que la humanidad se enfrenta a un" enemigo común" en el COVID-19. Por el contrario, el ISIS ha dicho a sus miembros que su guerra mundial continuará, incluso cuando el virus se extienda. Además, les ha dicho que los regímenes de seguridad nacional e

[17] Véase el artículo publicado en France24 04/01/2020, disponible en: https://www.france24.com/en/20200104-syria-death-toll-tops-380-000-in-almost-nine-year-war-monitor

internacional que ayudan a mantener al grupo bajo control están a punto de ser sobrecargados por el virus, por lo que deben aprovecharlos al máximo.

Finalmente, a la delicada situación de seguridad y humanitaria producto de la crisis en Siria ahora se le agrega la amenaza de la pandemia. La enfermedad ha sido durante mucho tiempo una preocupación diaria en los campos de detención (como al-Hol en el noreste de Siria para las familias de los militantes de ISIS) y refugiados (como Za'atari, el mayor campo de refugiados del mundo donde 120.000 personas se encuentran bajo cuarentena). Ahora, cada muerte sin diagnósticos claros aumenta la ansiedad sobre posibles brotes de COVID-19[18].

[18] Véase el Informe Especial de Embajada Abierta, disponible en: https://www.embajadaabierta.org/post/la-interminable-cuarentena-de-los-refugiados

DERECHOS HUMANOS EN TIEMPOS DE COVID-19

DERECHOS HUMANOS EN TIEMPOS DE COVID-19

Los Estados se enfrentan a enormes desafíos al tratar de proteger a sus habitantes de la amenaza del COVID-19. Las medidas adoptadas por los Estados invadirán inevitablemente los derechos y libertades que forman parte integrante y necesaria de una sociedad democrática. El desafío central será amalgamar esas medidas con las normas internacionales de derechos humanos.

El COVID-19 ha puesto a la Humanidad frente a una emergencia de salud pública sin precedentes en la Historia moderna y a los Estados, ante un desafío tan complicado de abordar como la propia pandemia: alcanzar un equilibrio adecuado entre las medidas para frenar la propagación del virus y proteger las vidas de sus habitantes, por un lado, y respetar plenamente los derechos humanos, por otro.

Hasta ahora, las respuestas de los gobiernos a la crisis han incluido amplias restricciones de derechos, entre ellos la libertad de circulación, expresión y reunión. Sin embargo, el derecho internacional es consciente del grave impacto de las pandemias -y otros acontecimientos catastróficos- en el orden social, y proporciona criterios para orientar a los Estados ante estas emergencias.

Frente a graves amenazas a la salud pública y a emergencias que puedan amenazar la vida de la población, las restricciones de algunos derechos pueden estar justificadas bajo las normas internacionales de derechos humanos.

Limitaciones legales

Los derechos humanos son interdependientes, lo que significa que la violación de uno puede repercutir en el disfrute de otros derechos. A su vez, algunos derechos humanos (como el derecho a no ser sometido a torturas ni a la esclavitud) son absolutos y no admiten limitaciones.

Sin embargo, la mayoría de los derechos humanos no son absolutos y pueden ser restringidos, aunque dentro de ciertos límites. Estas limitaciones están prescritas por el derecho (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convenio Europeo de Derechos Humanos, etcétera) de conformidad con un objetivo legítimo y cuando dicha limitación sea proporcional a dicho objetivo[19].

Las limitaciones permiten equilibrar intereses individuales y colectivos, pero hay casos estrictos sobre cuándo, cómo y hasta qué punto se puede restringir derechos.

[19] Véase el artículo de Alessandra Spadaro en el European Journal of International Law 16/03/2020, disponible en: https://www.ejiltalk.org/do-the-containment-measures-taken-by-italy-in-relation-to-covid-19-comply-with-human-rights-law/

Las restricciones por motivos de salud pública o emergencia nacional, como la cuarentena obligatoria o el aislamiento de las personas sintomáticas, además de ser conformes con el derecho, deben ser estrictamente necesarias, basadas en pruebas científicas, proporcionadas, no arbitrarias ni discriminatorias en su aplicación, de duración limitada, respetuosas de la dignidad humana y sujetas a revisión por autoridad competente.

Los "Principios de Siracusa sobre la limitación y derogación de disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", adoptados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1984, proporcionan una orientación a los Estados sobre las acciones que restringen los derechos humanos por motivos de salud pública o emergencia nacional.

Esos Principios Indican que toda medida adoptada para proteger a la población que limite los derechos y libertades de las personas debe ser legal, necesaria y proporcionada; que los estados de emergencia tengan una duración limitada y cualquier restricción de los derechos debe tener en cuenta el impacto desproporcionado en poblaciones específicas o grupos marginados.

Al respecto, las Naciones Unidas han advertido que "las declaraciones de emergencia basadas en el brote de COVID-19 no deberán utilizarse como excusa para atacar a grupos, minorías o individuos particulares". En este orden de ideas podemos mencionar el alarmante aumento de cifras de homicidios y de uso indiscriminado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad de ciertos Estados contra personas que viven en situaciones de vulnerabilidad desde que fue declarada la pandemia.

A su vez, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sostiene que esta situación de emergencia "no debe funcionar como una cubierta para la acción represiva bajo el disfraz de la protección de la salud... y no deben ser usadas simplemente para aplacar las voces disidentes"[20].

Un ejemplo elocuente de ello son las medidas adoptadas en Hungría, cuyo Parlamento ha aprobado una ley que permite al primer ministro Viktor Orban gobernar por decreto, suspender las elecciones indefinidamente y aplicar penas que coartan sensiblemente la libertad de expresión.

Al menos 84 países han impuesto políticas y medidas de emergencia debido a la crisis del COVID-19, pero sólo 11 de ellos han informado oficialmente a las Naciones Unidas de las suspensiones de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

[20] Véase el discurso completo de la titular Michelle Bachelet 14/05/2020, disponible en: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25886&LangID=E

Obligaciones y cooperación internacional

Las obligaciones de los Estados incluyen la garantía de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, de conformidad con el principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos.

El pleno respeto de estos derechos es esencial en todas las etapas de la crisis y no debe considerarse una excepción que sólo puede permitirse una vez que se haya reducido al mínimo la amenaza para la salud. Las personas afectadas por una emergencia de salud pública, incluidas las desplazadas como consecuencia de los acontecimientos, siguen teniendo derecho a la protección plena y efectiva de las normas de derechos humanos.

Las normas internacionales de derechos humanos garantizan a todas las personas el derecho al más alto nivel posible de salud y obligan a los Estados a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir las amenazas a la salud pública y a prestar atención médica a quienes la necesiten.

El acceso a la información relacionada con la salud también es una cuestión crucial. Proporcionar educación y acceso a la información relativa a los principales problemas de salud de la comunidad, incluidos los métodos para prevenirlos y controlarlos se considera una obligación de prioridad comparable a las obligaciones fundamentales del derecho a la salud. Por ejemplo, en Perú, el gobierno emitió un decreto que garantiza los servicios de internet durante la pandemia incluso si los usuarios no pueden pagar.

Asimismo, los Estados tienen la obligación de proteger el derecho a la libertad de expresión, incluido el derecho a buscar, recibir y difundir información de todo tipo, independientemente de las fronteras.

En este sentido, Bangladesh, Camboya, China, Egipto, Etiopía, Turquía y Venezuela, han arrestado y detenido a periodistas y otras personas por informar o expresar opiniones sobre la pandemia en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Una situación de particular importancia es la del derecho a la privacidad. Ante la necesidad de rastrear y aislar a las personas sintomáticas o que hayan estado en contacto con algún individuo infectado con COVID-19, varios Estados como Corea del Sur, Israel o China han apelado a herramientas de reconocimiento facial, rastreo de teléfonos celulares y software de vigilancia. Al respecto, el Relator Especial sobre el Derecho a la Privacidad de las Naciones Unidas, Joseph Cannataci, advierte que "estas medidas, que atentan de forma directa contra el derecho a la privacidad de las personas, deben ser restringidas en su aspecto temporal y material y circunscribirse pura y exclusivamente a la situación de emergencia"[21].

[21] Véase el comunicado oficial 16/03/2020, disponible en: http://www.oacnudh.org/covid-19-los-estados-no-deberian-abusar-de-medidas-de-emergencia-para-suprimir-derechos-humanos-expertos-as-de-la-onu/

La gran mayoría de los Estados han reconocido que las obligaciones en materia de derechos humanos incluyen la obligación de cooperación y asistencia, incluso con respecto al derecho a la salud.

Un aspecto fundamental de la obligación de cooperación internacional es que los Estados compartan información, de manera transparente y eficaz sobre los riesgos y la propagación del COVID-19, así como sobre las opciones de prevención y tratamiento. Es igualmente importante asegurar una respuesta mundial coordinada, que incluya la participación de todos los actores y las partes afectadas.

A medida que aumenta la preocupación por la forma en que la crisis del coronavirus puede amenazar los derechos humanos en todo el mundo, las Naciones Unidas han solicitado a los países que adopten un enfoque de la pandemia más cooperativo, global y basado en los derechos humanos, que el secretario general, António Guterres, ha calificado como "crisis humana"[22].

Desafíos futuros

Incluso en una situación de emergencia mundial como la actual debe prevalecer el estado de derecho. Es un principio fundamental de toda sociedad democrática que la acción del Estado debe ser, siempre, conforme a la ley.

El principal desafío social, político, económico y jurídico al que se enfrentan los Estados será su capacidad para responder a esta crisis de manera eficaz, de tal manera de asegurarse al mismo tiempo de que las medidas que adopten no socaven los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho.

Esta pandemia nos ha recordado nuestra interconexión como seres humanos y la necesidad de cooperación internacional para proteger nuestras vidas y nuestra salud. También puede ser una oportunidad para reavivar la importancia del respeto a los derechos humanos y ser un impulso a los esfuerzos para hacer frente a la desigualdad mundial.

[22] Véase el comunicado del Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, "We are all in this Together: Human Rights and COVID-19 Response and Recovery", Report to the Human Rights Council, 20/04/2020, disponible en: https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/we-are-all-together-human-rights-and-covid-19-response-and

LA ECONOMÍA GLOBAL POST COVID-19

LA ECONOMÍA GLOBAL POST COVID-19

La reacción sanitaria global en cadena que generó la pandemia acarreó una crisis sin precedentes en la economía moderna, que persistirá en 2020. Los pronósticos más actualizados lo asumen, pero también imaginan una recuperación en 2021, si se imponen los estímulos necesarios con la coordinación multilateral adecuada. América Latina no es una excepción en estas estimaciones del FMI y de la CEPAL.

La pandemia del COVID-19, que se ha propagado hasta nuestros días a una velocidad y escala desconocidas por el mundo moderno, también ha sometido a sus economías a un retroceso tan pronunciado y brusco que altera todas las curvas estadísticas y demanda, en adelante, un cambio cualitativo en las respuestas a una coyuntura histórica en la que predomina, por sobre todo, la incertidumbre.

No es casualidad que, por primera vez en su historia de casi siete décadas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya hecho sus proyecciones de retroceso y crecimiento para 2020 y 2021 sobre la base de modelos que consideran una doble perspectiva: la macroeconómica y la epidemiológica[23].

(real GDP, annual percent change)	2019	2020	2021
World Output	**2.9**	**-3.0**	**5.8**
Advanced Economies	**1.7**	**-6.1**	**4.5**
United States	2.3	-5.9	4.7
Euro Area	1.2	-7.5	4.7
Germany	0.6	-7.0	5.2
France	1.3	-7.2	4.5
Italy	0.3	-9.1	4.8
Spain	2.0	-8.0	4.3
Japan	0.7	-5.2	3.0
United Kingdom	1.4	-6.5	4.0
Canada	1.6	-6.2	4.2
Other Advanced Economies	1.7	-4.6	4.5
Emerging Markets and Developing Economies	**3.7**	**-1.0**	**6.6**
Emerging and Developing Asia	5.5	1.0	8.5
China	6.1	1.2	9.2
India	4.2	1.9	7.4
ASEAN-5	4.8	-0.6	7.8
Emerging and Developing Europe	2.1	-5.2	4.2
Russia	1.3	-5.5	3.5
Latin America and the Caribbean	0.1	-5.2	3.4
Brazil	1.1	-5.3	2.9
Mexico	-0.1	-6.6	3.0
Middle East and Central Asia	1.2	-2.8	4.0
Saudi Arabia	0.3	-2.3	2.9
Sub-Saharan Africa	3.1	-1.6	4.1
Nigeria	2.2	-3.4	2.4
South Africa	0.2	-5.8	4.0
Low-Income Developing Countries	5.1	0.4	5.6

Imagen 1 - Proyecciones de crecimiento 2020-21. Fuente: FMI.

[23] Véase el documento de Perspectivas de la Economía Mundial, disponible en: https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020

En ese horizonte de incertidumbre sobre el que se recortan tanto los pronósticos de actividad económica global como los de la evolución de la propia pandemia, los organismos multilaterales incorporaron por primera vez el resultado de consultas con epidemiólogos, expertos en salud pública y en enfermedades infecciosas.

El violento frenazo de la actividad económica global, con implicaciones que van desde el empleo hasta la producción de grandes y pequeñas empresas, la interrupción del comercio y la sobreoferta de commodities como el petróleo, obligó a improvisar respuestas individuales de los Estados, a través de préstamos, emisión de bonos o, directamente, distribuyendo efectivo a sus ciudadanos más vulnerables, aún en países como Argentina, con problemas preexistentes de endeudamiento.

Sin embargo, una primera conclusión importante de organismos como el FMI, la CEPAL, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) es que la crisis volverá a necesitar, como en 2008 pero a escala mayor, una coordinación multilateral decidida para mitigar el impacto de la pandemia, y superarla después.

Eso incluye especialmente a la instancia de gobernanza global surgida en 2008, la cumbre de líderes del Grupo de los 20 (G20), que camino a su próxima reunión anual de 2020 en Riad (Arabia Saudita) ya ha dado los primeros pasos en esa dirección, con su apoyo a la suspensión temporal del pago del servicio de la deudas de países empobrecidos.

Por delante, se abre para las sociedades y sus líderes políticos un océano de aguas todavía sin cartografiar. Como dijo el reconocido historiador británico Adam Tooze, "la pandemia del Covid-19 es el shock económico más dramático y repentino que la mayoría de nosotros jamás vivirá"[24].

Por primera vez desde 1998 volverán a crecer los índices globales de pobreza, según el Banco Mundial[25]. A finales de este año, al menos 8% de la población mundial -unas 500 millones de personas- quedará en la indigencia, básicamente por la pérdida de empleos que causó la pausa forzada por el virus, según la ONU.

Estados, organismos internacionales e instancias de gobernanza como el G20 se enfrentarán en adelante con una combinación inédita de problemas y desafíos, que en carne propia ya experimentan decenas de millones de trabajadores y ciudadanos de los sectores más vulnerables, sin excluir esta vez los países más avanzados.

[24] Véase la nota publicada por The Guardian 07/05/2020, disponible en: https://www.theguardian.com/books/2020/may/07/we-are-living-through-the-first-economic-crisis-of-the-anthropocene

[25] Véanse las proyecciones del Banco Mundial, disponibles en: https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/projected-poverty-impacts-of-COVID-19

En lo inmediato, grandes déficits, deudas e incluso defaults; recesión global con deflación por exceso de oferta; y la demanda social de costosas inversiones sanitarias. Hacia adelante, el riesgo de una desglobalización traumática, tensiones entre modelos democráticos y autoritarios, y la disputa comercial-tecnológica entre China, Estados Unidos y la Unión Europea (UE). Como telón de fondo, la amenaza de nuevas pandemias en un planeta estresado al límite.

Mientras tanto, estos que siguen son los diagnósticos y pronósticos disponibles que nos sirven como guía.

El Gran Confinamiento

A finales de abril, la OIT actualizó sus peores vaticinios sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en todo el mundo: unos 1.600 millones de trabajadores de la economía informal, es decir casi la mitad de la fuerza laboral global, quedaron en peligro inmediato de perder sus medios de subsistencia. Al menos 2 mil millones de esos trabajadores ya perdieron un 60% de sus ingresos habituales[26].

"Esta crisis es como un dominó. Países que caen uno tras otro, después otro, después otro… son dramáticamente golpeados por la pandemia, primero, y después por las medidas restrictivas para contener la pandemia", o Gran Confinamiento, resumió a su vez la directora ejecutiva del FMI, Kristalina Georgieva[27].

[26] Véase la publicación de la OIT, disponible en: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_743036/lang--en/index.htm

[27] Véase la nota publicada por Reuters 27/03/2020, disponible en: https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-imf-georgieva-idINL1N2BK1PU

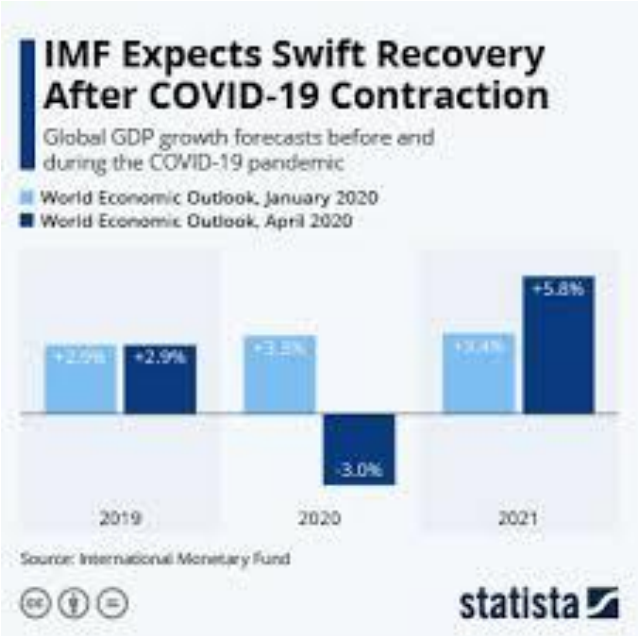


Imagen 2 - El FMI espera rápida recuperación luego de la contracción económica por el COVID-19. Fuente: Statista, en base a datos del FMI.

En el escenario base planteado por el FMI, que supone que la pandemia se disipe en el segundo semestre de 2020 y que las medidas de contención se desactiven gradualmente, se proyecta que la economía mundial crezca 5,8% en 2021, siempre y cuando se mantengan las políticas proactivas desde Estados y bancos centrales. Antes del COVID-19, esa proyección era de 3,4%.

En el caso de la eurozona, donde España e Italia, pero también Francia y Alemania sufrieron grandes pérdidas humanas por la pandemia, el PIB caerá este año hasta un 7,5%: Alemania (-7%), Francia (-7,2%) y sobre todo Italia (-9,1%). Del mismo modo, se pronostica en 2021 una recuperación de 4,7%.

Para Estados Unidos, todavía en plena lucha contra la pandemia y con un récord de contagios y muertes a nivel global, su economía puede retroceder hasta 5,9% en 2020, según estimó el FMI, que pronosticó para 2021 un alza de 4,7%.

El caso de China, el país donde se originó el COVID-19, y también el primero en controlar el brote y sacar del confinamiento a millones de personas, es similar: el Fondo rebajó su estimación de crecimiento global para 2020 hasta 4,8%, aunque espera un fuerte rebote para 2021, de hasta 9,2%, básicamente porque comenzó su recuperación también antes que el resto de los países.

Para el mundo en desarrollo todo será mucho más difícil aún. Según el Banco Mundial, el África subsahariana entrará en recesión por primera vez en 25 años, con casi la mitad

de los empleos destruidos por la crisis de la pandemia[28]. El sur de Asia experimentará, probablemente, su peor año en cuatro décadas.

Qué hacer

Los organismos internacionales, al igual que el conjunto de los analistas públicos y privados, reconocen que las consecuencias económicas del COVID-19 dependen de muchos factores combinados difíciles de predecir. El FMI enumera desde la trayectoria de la propia pandemia y la eficiencia en contenerla, hasta los graves problemas en la oferta-demanda y el endurecimiento de los mercados financieros, más el colapso del precio de las materias primas, incluido el petróleo, determinante en los ingresos de muchos países, sobre todo en desarrollo.

Aun así, junto con todas las políticas proactivas al alcance de los Estados y los bancos centrales -fiscales, monetarias y financieras en respaldo de hogares y de empresas-, los propios organismos han puesto en primer plano la adopción de las medidas necesarias para reducir el contagio y proteger vidas. "Harán mella a corto plazo en la actividad económica, pero también deben ser consideradas como una inversión importante para la salud humana y económica a largo plazo", dice el FMI en las Perspectivas de la Economía Mundial 2020.

Es muy probable que este año la economía mundial experimente la peor recesión desde la Gran Depresión de los '30 y empalidezca la experimentada durante la crisis financiera mundial de hace una década. Ante la crisis de 1930, sin la arquitectura multilateral de crédito actual, los países buscaron liquidez a través de políticas mercantilistas que sólo empeoraron la desaceleración mundial. Hoy, el FMI cuenta con una capacidad de préstamo de 1 billón de dólares al servicio de sus 189 países miembros, el cuádruple de la que tenía cuando estalló la crisis de 2008.

También por ello, según el FMI, "una estrecha cooperación multilateral es esencial para superar los efectos de la pandemia, e incluye ayudar a países con restricciones financieras que enfrenten un doble shock, sanitario y de financiamiento; y también es esencial para canalizar ayuda a países con sistemas sanitarios deficientes. Es urgente que los países trabajen en forma mancomunada para frenar la propagación del virus y para desarrollar una vacuna y terapias contra la enfermedad".

Esa cooperación multilateral incluye compartir equipos y conocimientos especializados para reforzar los sistemas sanitarios en todo el mundo, y un esfuerzo mundial para garantizar que los países tanto ricos como pobres tengan acceso inmediato a las terapias y vacunas que se desarrollen contra el COVID-19.

[28] Véase la publicación del Banco Mundial *El Pulso de África*, disponible en: https://www.worldbank.org/en/news/video/2020/04/21/africas-pulse-covid-19-coronavirus-causes-first-recession-in-25-years

El caso de América Latina

La crisis económica, a diferencia de la pandemia en sí, pone de relevancia las mayor capacidad de resistencia de las economías avanzadas, con grandes recursos financieros para rescatar sus economías a nivel macro y micro, y el privilegio, como lo definen los organismos internacionales, de emitir monedas de reserva.

"Pero varias economías de mercados emergentes y en desarrollo que carecen de activos similares y que afrontan crisis sanitarias, económicas y financieras simultáneas necesitarán la ayuda de acreedores bilaterales de las economías avanzadas y de instituciones financieras internacionales", reconoce el FMI.

Como explicó Georgieva, al comentar el último Panorama Económico Mundial del FMI, los mercados emergentes y las economías en desarrollo se enfrentan a problemas adicionales bastante graves: los exportadores de productos básicos por el derrumbe de precios y los que dependen del flujo de capital externo que sufren la huida de fondos hacia mercados más seguros en "proporciones gigantescas, mucho más que durante la crisis de 2008", por unos 100 mil millones de dólares.

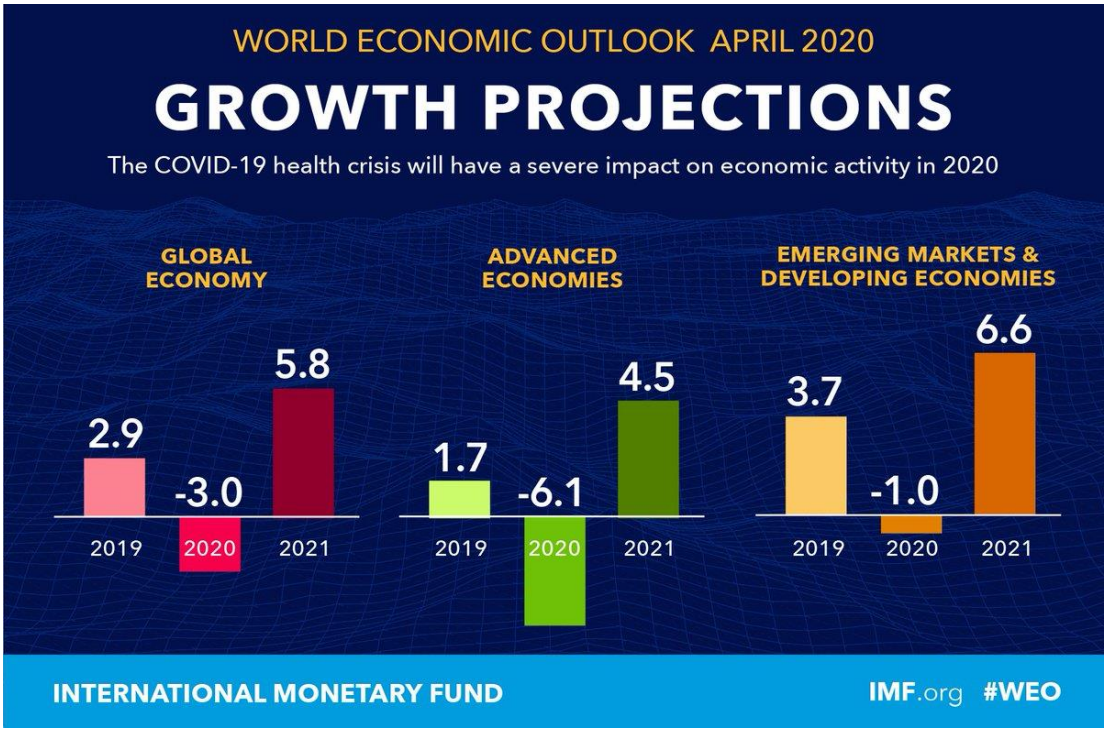


Imagen 3 - Proyecciones de crecimiento según el informe Perspectivas de la Economía Mundial, abril 2020. Fuente: FMI.

En nuestra región, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la pandemia del COVID-19 llevará a la mayor contracción de la actividad económica en la historia: caerá -5,3% en 2020[29]. Factores externos e internos llevarán a la peor contracción que la región haya sufrido desde 1914 (-4,9%) y 1930 (-5%). Antes de la pandemia, ya acumulaba casi siete años de bajo crecimiento (0,4% en 2014-19).

América del Sur se contraerá -5,2%, con varios países de esta zona muy afectados por la caída de la actividad de China. En América Central la caída sería de -2,3%, afectada por la caída en el turismo y la reducción de la actividad de Estados Unidos, su principal socio comercial y fuente de remesas. El Caribe se contraería en -2,5%, debido a la reducción de la demanda de servicios turísticos, estima CEPAL.

Esta crisis se ha transmitido a América Latina y el Caribe a través de cinco canales: reducción del comercio internacional, caída de precios de los productos primarios, la intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales, menos demanda de turismo y una reducción de las remesas. El derrumbe del precio del petróleo impacta con fuerza, adicionalmente, en las economías de países productores como Venezuela, México y Brasil.

La región pudo anticipar la llegada de la pandemia y tiene una población más joven y resiliente, pero a la vez sufre unos servicios sanitarios deficientes en un contexto de mayor pobreza, falta de recursos y el arrastre de muchos años de contracción.

El rol multilateral

Obviamente, "se prevé un fuerte aumento del desempleo con efectos negativos en pobreza y desigualdad", explicó la secretaria ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena, al presentar su último balance de la situación económica regional. La tasa de pobreza en la región aumentaría en 4,4% durante 2020 (de 30,3% a 34,7%), lo que significa un incremento de 29 millones de personas en situación de pobreza. La pobreza extrema crecería en 2,5% (de 11,0% a 13,5%), otras 16 millones de personas.

Después de todas las medidas financieras y fiscales adoptadas por los países, a la espera de un "apoyo flexible" de los organismos financieros multilaterales, con líneas de crédito a bajo costo, alivios del servicio de la deuda y eventuales condonaciones, "se requiere repensar el modelo de inserción de la región y las alternativas de reactivación a la luz de los cambios estructurales que ocurrirán en la globalización y el mundo post COVID-19", según CEPAL.

Mientras tanto, instancias de gobernanza global como el G20 deben alentar a las organizaciones multilaterales a prestar a tasas de interés favorables y aliviar de la deuda de los países altamente endeudados, aplazándola o condonándola.

[29] Véase el comunicado de la CEPAL, disponible en: https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-covid-19-llevara-la-mayor-contraccion-la-actividad-economica-la-historia-la

“De lo contrario, los pagos serán imposibles y se comprometerá el espacio fiscal.Se requieren medidas excepcionales para enfrentar una crisis sin precedentes. No habrá progreso sin cooperación y solidaridad internacionales”, resumió Bárcena.

Pensando en el futuro, la CEPAL advierte que la crisis productiva que generó la pandemia traerá cambios que persistirán. No se revertirá la globalización, pero sí habrá una economía mundial más regionalizada en torno a tres polos: Europa, América del Norte y Asia oriental.

Según el organismo, hay que prepararse para el mundo post COVID-19 y pensar el futuro de la región en la nueva geografía económica ante la elevada dependencia de manufacturas importadas, para lo cual se requieren políticas industriales que permitan a la región fortalecer sus capacidades productivas y generar nuevas capacidades en sectores estratégicos. En ese sentido, ahora que surgen voces especulando con una eventual ruptura de experiencias regionales históricas que llevó décadas construir, como el MERCOSUR, el organismo propone avanzar hacia una mayor integración regional, tanto en lo productivo y comercial como en lo tecnológico.

“La coordinación de nuestros países en materia macroeconómica y productiva es crucial para negociar las condiciones de la nueva normalidad, particularmente en una dimensión urgente en la actual crisis y en el mediano plazo: la del financiamiento para un nuevo estilo de desarrollo con igualdad y sostenibilidad ambiental”, enfatizó Bárcena.

LAS RESPUESTAS DE AMÉRICA LATINA AL COVID-19

LAS RESPUESTAS DE AMÉRICA LATINA AL COVID-19

Así como los contagiados, América Latina recibe el impacto de COVID-19 en condiciones preexistentes propias de la región, políticas, económicas y también sanitarias, que la obligan a plantearse un doble esfuerzo para relacionarse con un mundo bruscamente transformado e incierto, con autonomía y más integración. Este es el primero de dos Informes Especiales dedicados a la actual situación regional.

América Latina quedó expuesta, como el resto del mundo desde comienzos de 2020, a las traumáticas consecuencias del COVID-19, pero tanto en términos económicos como sanitarios el impacto de la pandemia se sintió diferente según los países, que a su vez eligieron respuestas variadas para afrontarla.

A la veloz propagación de la pandemia y a los efectos de una inédita pausa productiva forzada, la región debe sumar difíciles condiciones económicas y sociales preexistentes, con Estados financieramente frágiles por el contexto global ya adverso en 2019.

En particular, se volvieron relevantes las debilidades estructurales de los sistemas sanitarios en la región, experimentados en el tratamiento de epidemias locales como las de dengue, chikungunya y zika, pero limitados a su vez por la sistemática falta de recursos humanos y materiales para otra emergencia a semejante escala.

Todo ello, se desarrolla en un entorno social crecientemente vulnerable, que pierde muchos avances logrados por gobiernos progresistas en la década de los 2000 y que dificulta operativos de prevención a la altura de lo que demanda esta "doble carga de enfermedad" que impone la pandemia del COVID-19 .

A diferencia de Europa, e incluso América del Norte, la región latinoamericana dispuso de dos ventajas estratégicas frente a la pandemia, en especial en América Central y del Sur. Por un lado, el tiempo que le llevó propagarse de Este a Oeste del globo, y permitió a la región prevenirse con cierre de fronteras, cuarentenas y hasta toques de queda. Por otro, haber empezado la batalla contra el COVID-19 a finales del verano austral, a salvo de los climas fríos que potencian el virus.

Esas ventajas, sin embargo, con una larga serie de coyunturas nacionales conflictivas previas -crisis institucionales, políticas, migratorias, de seguridad, económicas y de endeudamiento- que ponen a prueba a las sociedades latinoamericanas y a sus liderazgos, como pocas veces en la Historia moderna.

Realidades y respuestas

América Latina supo tan temprano como el 26 de febrero pasado que el COVID-19 dejaba de ser una rara sigla mencionada en noticias sobre China y Europa para

convertirse en una amenaza sanitaria en ciernes real. Brasil anunció ese día el primer contagio de la región, un caso "importado" desde Italia.

Las Américas habían registrado otros anteriores, en Estados Unidos y Canadá, un mes antes. La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, recomendó que los países del continente intensificaran sus planes de preparación y respuesta a lo que todavía no era, oficialmente, una pandemia (en mayo, el continente superó a Europa en número de contagios).

La situación, avisó la OPS, podría variar de un país a otro, según sus condiciones sociales y sanitarias preexistentes, y requerir por ello respuestas específicas.

Así, Argentina registró el primer muerto por COVID-19 de la región, el 8 de marzo, pero dos meses después logró "aplanar" la curva de contagios y convertirse en un modelo sanitario posible a seguir, aún con todos las limitaciones económicas con los que tuvo que iniciar el nuevo gobierno semanas antes de estallar la pandemia.

A su vez, Perú fue el primer país de la región en decretar una cuarentena general obligatoria y cerrar sus fronteras. Con Ecuador y Costa Rica fueron los tres pioneros en reaccionar ante la pandemia tomando decididas medidas de restricción.

Pero dos meses después, esas semejanzas se diluyeron. Mientras Costa Rica exhibía una de las poblaciones menos castigadas (casi sin contagios comunitarios y con la tasa de mortalidad más baja en América), Ecuador y Perú vivían un calvario de enfermos y muertos, con duplicación de casos cada cuatro días o menos.

En esa brutal diferencia, imperaron las condiciones sociales y sanitarias dadas, determinantes para propagar o frenar la pandemia, y las acciones de los Estados para contener su propagación, coordinadas con todos los actores sociales, como pasó antes con otras epidemias en la región (dengue, chikungunya y zika).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluyendo el sector sanitario privado, la región latinoamericana exhibía en 2017 un gasto en salud per cápita de USD 1.076 anuales, contra USD 3.364 de los países de la Unión Europea (UE)[30].

El dinero tampoco lo hace todo: hay países que tienen un alto gasto per cápita, pero una insuficiente cobertura universal, porque sobre todo la parte privada del sistema plantea muchos problemas de acceso a los servicios, básicamente de costos.

Por ejemplo, Brasil, con uno de los sistemas de salud más amplios de América Latina, llegó a a la pandemia con una inversión de 3,8% en salud pública, contra el 7,9% del Reino Unido, el 8% de España y casi el 10% de Alemania y Francia, según el Instituto de Estudios para Políticas de Salud (IEPS) brasileño.

[30] Véase la nota de BBC Mundo difundida por La Nación 24/03/2020, disponible en: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-que-capacidad-tienen-paises-america-latina-nid2346753

La capacidad de los servicios sanitarios públicos, y la de sus recursos humanos, fue el primer factor para explicar la relativa eficiencia de las respuestas en países tan distintos como Cuba, Chile, Uruguay y Argentina, respecto de otros como Venezuela, Haití, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Bolivia o Perú.

Durante la década de los 2000 y hasta 2015, según la OPS, los países de la región habían hecho progresos significativos con el aumento en la cobertura y el acceso a servicios de salud y la inversión pública sanitaria, pero aún restaba mucho por hacer para cerrar la brecha de la equidad y abordar los nuevos retos. Pero a partir de 2015, la situación comenzó a deteriorarse[31].

Hoy, en todas las Américas hay 18 médicos, 59,7 enfermeras y 6,7 dentistas por cada 10.000 habitantes. El gasto público en salud promedio en la región equivale al 5% del PIB (por debajo del 6% recomendado por la OPS). El porcentaje en América del Norte (8%) es el doble que en América Latina y el Caribe (4%). Caso aparte es Cuba, que pudo enviar contingentes de médicos a otros países de la región.

La pandemia del COVID-19 llegó a la región cuando un 30% de la población estaba sin acceso constante a la atención sanitaria por razones económicas, según la OPS, y cuando solo tres países -Cuba, Argentina y Uruguay- superaban el promedio global de camas hospitalarias de 27 por cada 10.000 habitantes. También había una gran disparidad en la disponibilidad en servicios de cuidados intensivos.

Dada esa situación, beneficiosa para países con antecedentes de sistemas de salud pública y protección social en general más desarrollados, como México, Brasil y Argentina, pero muy limitante para otros sin esa ventaja histórica, en la dinámica de esta pandemia incidió, también, el tipo de respuesta sanitaria que dio cada país.

Tomando los tres países más grandes de la región, cada uno siguió su camino. Argentina, como se dijo, privilegió el cuidado de la salud con el consenso total de sus autoridades nacionales, provinciales y municipales, y bajo la guía y consejo de los principales sanitaristas y científicos del país. En medio de una dura negociación de su deuda, el país tomó el camino económicamente más costoso pero seguro.

México y Brasil, en cambio, adoptaron algunas medidas básicas y a tiempo, pero siguieron dando prioridad a la actividad económica (lo mismo hizo Chile, que concentra el 8,3% del total de contagios). En Brasil, donde el gobierno central se negó abiertamente a imponer cuarentenas -después dictadas unilateralmente por varios estados- los resultados fueron pésimos. México ya acumula más muertes que las declaradas por China, más de 5 mil.

Con la mitad de los contagios y dos terceras partes de las muertes de toda la región, Brasil atraviesa hoy una emergencia sanitaria de incierta salida, con una situación desesperante en los sectores socialmente más vulnerables de los grandes centros

[31] Véase el documento de la OPS disponible en: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/UHC-OVERVIEW-SPA-GA-15-JUNE-2015.pdf

urbanos, como San Pablo y Río de Janeiro. El país exhibe una de las peores estadísticas del mundo (arriba en el ranking de contagios y fallecidos).

Nuestra región

En el quinto mes de la pandemia, cuando buena parte de Asia y Europa todavía no dejaron atrás lo peor de la crisis, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendó a los países de América Latina ser cautelosos a la hora de relajar las medidas nacionales de cuarentena para contener el COVID-19.

"Levantar las restricciones demasiado pronto podría acelerar la propagación de la enfermedad y dar paso a un drástico aumento o la propagación en áreas contiguas", explicó la organización[32]. Para entonces, mediados de mayo, la región ya acumulaba más de medio millón de contagios y casi 25 mil muertes. Pero también presionaban las demandas de reactivación económica desde todos los sectores y niveles.

El tremendo impacto económico provocado por las restricciones adoptadas para frenar la pandemia -la economía regional caerá al menos 5,3% en 2020 según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU, el peor retroceso en sus registros- presiona sobre las sociedades y sus gobiernos para comenzar a flexibilizarlas aún a riesgo de nuevos contagios.

La pandemia del COVID-19, expuso la CEPAL, que tiene profundas implicaciones sobre el crecimiento económico y el desarrollo social, llega a América Latina y el Caribe en un contexto de bajo crecimiento y, sobre todo, de alta desigualdad y vulnerabilidad, en el que se observan tendencias crecientes en la pobreza y pobreza extrema, un debilitamiento de la cohesión social y manifestaciones de descontento.

Las medidas de cuarentena y distanciamiento físico, necesarias para frenar la propagación acelerada del coronavirus y salvar vidas, generan pérdidas de empleo (en 2020 habría 11,6 millones de desocupados más que en 2019) y reducen los ingresos laborales de las personas y de los hogares.

En las zonas rurales, puede afectarse la vida de 40 millones de trabajadores informales, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El 76,8% de trabajadores rurales, más de 40 millones de personas, tienen empleos informales.

En 2020 la pobreza en América Latina aumentaría al menos 4,4% (28,7 millones de personas adicionales) con respecto al año previo, por lo que alcanzaría a un total de 214,7 millones de personas (el 34,7% de la población de la región). En la pobreza extrema caerían en 2020 unas 15,9 millones de personas, para sumar 83,4 millones.[33]

[32] Véase la nota en el portal oficial de Naciones Unidas, disponible en: https://news.un.org/es/story/2020/05/1473872

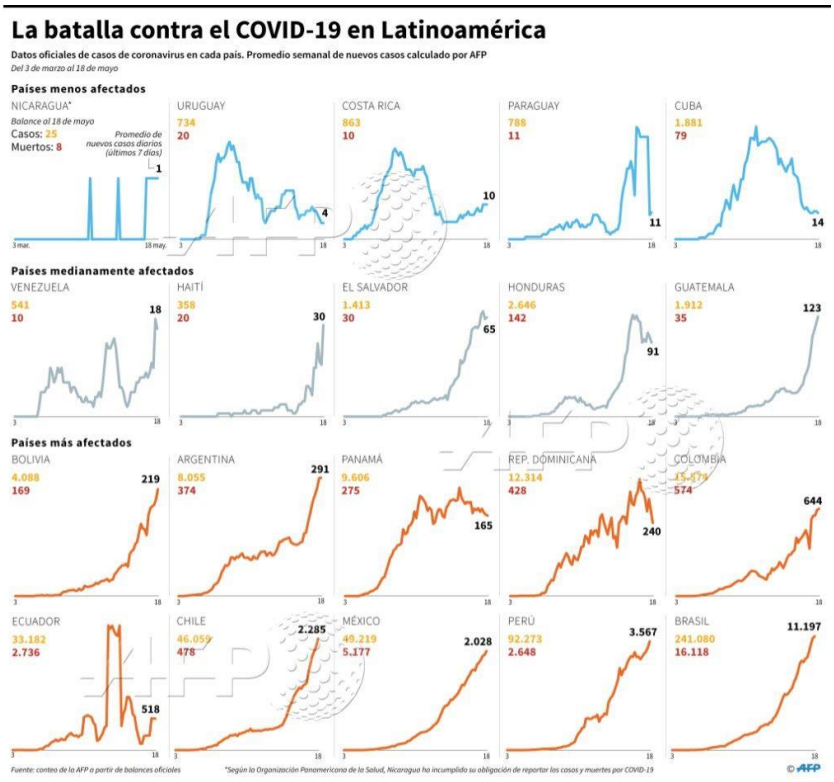
[33] Véase el reporte completo, disponible en: https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-propone-avanzar-un-ingreso-basico-ayudar-la-poblacion-mas-vulnerable-superar

En línea con el aumento de la pobreza y la pobreza extrema, también aumentará la desigualdad en todos los países de la región. La CEPAL proyecta incrementos del índice de Gini de entre el 0,5% y el 6,0%. Una vez más, los peores resultados se esperan en las economías más grandes de la región.

"Esto representa un retroceso respecto a los esfuerzos de la región en la década de 2000, cuando por primera vez en su historia se cambió la tendencia de la desigualdad y se aprendió que avanzar en la igualdad tenía resultados muy positivos en la lucha contra la pobreza", sostuvo el organismo.

Eso llevó a la CEPAL a proponer a los gobiernos de la región que instrumenten con urgencia un ingreso básico de emergencia para sus 215 millones de pobres, por el equivalente a USD 143 mensuales, durante seis meses", camino a la adopción futura de un ingreso básico universal. Costaría 3,4% del PIB de la región, que ya entrega en dinero a los más pobres 0,6% y en la actual crisis sumó otro 0,7%.

El restante 2,1% necesario para financiar el ingreso básico de emergencia podría financiarse con un combate frontal a la evasión fiscal, que en la región se calcula en 6,3% del PIB, con otras medidas fiscales y con incrementos en los presupuestos de salud y educación, dijo la secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena.



Fuente: AFP

Enfoques

En el actual contexto recesivo, tanto el enfoque ideológico predominante en los distintos gobiernos como las realidades institucionales, políticas y económicas con las que cada país entró en la pandemia abren un gran abanico de respuestas.

La región ofrece casos muy dispares, desde el empobrecido Haití, donde la OMS teme un brote a gran escala y otra crisis humanitaria sin importar el devenir económico, hasta Brasil, México y Chile, con más capacidad sanitaria pero que, a diferencia de Argentina, dan prioridad a la actividad económica.

A su vez, inciden aspectos netamente políticos, como en el caso de Bolivia, donde la pandemia interrumpió un calendario electoral y todo el proceso de normalización institucional desde la salida de Evo Morales del poder, a finales de 2019. En mayo el gobierno provisional de Jeanine Áñez enfrentaba crecientes protestas por la falta de insumos y alimentos en la región metropolitana de La Paz.

La situación de Venezuela es aún peor, en lo económico después del derrumbe del precio del petróleo que sostiene la frágil y golpeada economía del país caribeño, y en lo político por el bloqueo institucional que mantiene el poder dividido en dos grandes facciones. En mayo, todo se complicó más por la denuncia del gobierno de Nicolás Maduro de un intento de mini invasión y golpe de Estado cuya organización atribuyó a su rival, Juan Guaidó y al auspicio directo de Estados Unidos.

En marzo y abril, el envío de dinero hacia América Latina y el Caribe hechos por residentes desde Estados Unidos y Europa, por ejemplo, se redujo 18%, según el programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano[34].

Más allá de las negras estadísticas de todos los organismos multilaterales, la dimensión histórica de los desafíos que se avecinan para la región, en general, pueden sintetizarse en el pedido que el Banco Central de Chile hizo al Fondo Monetario Internacional (FMI), de un crédito flexible de USD 23.800 millones.

Luego, surgen las diferencias. Argentina, por ejemplo, cuyo anterior gobierno tomó con imprudencia un nivel de deuda que el propio FMI calificó como impagable, soporta grandes restricciones financieras -en medio de una durísima negociación con los acreedores- pero aún así compensa con una masiva asistencia financiera en subsidios y créditos a personas y empresas afectadas por la pandemia.

En palabras del presidente Alberto Fernández, al fundamentar su decisión de darle absoluta prioridad a la situación sanitaria de la población, la apertura económica tampoco ha librado a los países que la eligieron como estrategia, incluso en Europa, de soportar los costos de la parálisis comercial, la recesión y el desempleo globales.

En el caso de México, sin estructuras de asistencia tan consolidadas de asistencia como las de Brasil y Argentina, y con la creciente demanda social planteada por 52 millones de habitantes en la pobreza, la pandemia se superpuso además con una ola de violencia criminal que llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a permitir a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad interna.

[34] Véase la nota de BBC Mundo 15/05/2020, disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52653775

AMLO, crítico de las recetas neoliberales, respondió con una inyección de 30 mil millones de dólares en créditos y una batería de medidas para proteger al 70% de las familias (25 millones de hogares), mientras redujo salarios de altos cargos públicos y eliminó dependencias públicas. El país no llegó a medir los resultados del nuevo acuerdo de libre comercio con EEUU y Canadá. En mayo, AMLO anunció una "desescalada" de las restricciones, en un intento por normalizar la economía aún en pleno pico de contagios (unos 40 mil, con casi 4 mil muertos).

En Brasil, que terminó 2019 con reformas laborales, previsionales e impositivas diseñadas por su administración económica liberal, el presidente Jair Bolsonaro minimizó desde el principio el impacto de la pandemia y terminó alertando en mayo sobre un colapso del sistema productivo brasileño a corto plazo si los gobernadores que impusieron mayores restricciones insistían en mantenerlas.

Con negras estadísticas sanitarias de fondo, Bolsonaro se sirvió de la aguda crisis económica para reivindicar la continuidad de todo tipo de actividad económica y, a la vez, reclamar a los sindicatos que aceptaran congelar salarios durante dos años. En abril, el gobierno federal distribuyó ayudas a 50 millones de personas, por USD 19 mil millones. En mayo, las muertes llegaban a casi mil por día.

En ese marco, hasta el Mercosur fue motivo de tensiones entre sus cuatro socios fundadores (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) sobre las estrategias del bloque en tiempos de pandemia y recesión global. El gobierno argentino planteó sus dudas sobre la aceleración de negociaciones de algunos acuerdos con países extra bloque (Canadá, Corea del Sur, Singapur, Israel y el Líbano) y todos acordaron, finalmente, proceder con cautela en estos tiempos de crisis inédita.

Argentina reivindicó al Mercosur como una política de Estado para el país, pero invitó a sus socios a evitar una apresurada negociación de acuerdos comerciales que acentúen la primarización de las economías del bloque. En cambio, sostuvo el canciller Felipe Solá, "si el Mercosur recuperase las cifras de comercio entre los socios que alguna vez tuvo, hoy todos estaríamos más fuertes. Esa solidez sería la base para ganar competitividad, proyección y capacidad negociadora"[35].

[35] Véase la nota completa en Télam 10/05/2020, disponible en: https://www.telam.com.ar/notas/202005/462102-sola-sobre-el-mercosur-entre-socios-los-desacuerdos-suelen-ser-la-antesala-de-nuevos-consensos.html

GÉNEROS Y COVID-19: AUMENTA LA DESIGUALDAD EN AMÉRICA LATINA

GÉNEROS Y COVID: LA PROFUNDIZACIÓN DE LA DESIGUALDAD EN LA REGIÓN

La pandemia actual produjo una crisis económica sin precedentes que impacta sobre el mercado de trabajo y afecta de manera desigual a varones y mujeres. Así se refuerzan las desigualdades preexistentes vinculadas a los estereotipos de género y a la configuración de las relaciones sociales de producción y reproducción de la vida. El artículo propone un repaso por las desigualdades de géneros y su profundización en el marco del COVID-19 en América Latina.

La inserción de las mujeres en el mundo del trabajo latinoamericano

Según informes recientes de la OIT y la CEPAL la crisis económica provocada por la pandemia tendrá profundos efectos sobre los mercados de trabajo globales. La OIT, en su reporte del 27 de mayo, planteó que en el segundo trimestre de 2020 habrá una reducción del empleo mundial de alrededor del 10,7% interanual. El equivalente a 305 millones de trabajadores/as a tiempo completo[36].

En América Latina y el Caribe se estima que casi 30 millones de personas caerán en la pobreza y que los sectores sociales medios sufrirán un fuerte deterioro. La caída del PBI regional llegaría al 5,3%, el peor derrumbe desde 1930. La crisis llega a la región cuando ya se encontraba en una situación de estancamiento económico, con un crecimiento promedio del 0.4% del producto entre 2015 y 2019[37].

Dicho estancamiento afectó fuertemente la generación de empleo. Además, los países de la región se caracterizan por tener mercados de trabajo muy heterogéneos y con altas tasas de informalidad y precariedad. Esta situación deja sin protección social a una gran porción de la población que se encuentra más expuesta a la pandemia y a los efectos generados por las crisis. La creciente desprotección de los trabajadores y trabajadoras pone en jaque la posibilidad de garantizar la vida en igualdad de condiciones para todas y todos los habitantes.

El trabajo informal es la principal fuente de ingresos de la mitad de la población económicamente activa y hoy se encuentra en caída abrupta debido a las medidas de confinamiento para evitar la expansión del virus SARS-CoV-2. Este es el punto clave para comprender por qué la desigualdad de géneros en el mundo del trabajo se profundizará como consecuencia de la pandemia.

[36] Véase el documento de la OIT (mayo 2020) El COVID-19 y el mundo del trabajo. Cuarta edición. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_745965.pdf

[37] Véase CEPAL, N. (2020). Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación.

Según un trabajo conjunto de la OIT y la CEPAL[38] las mujeres tienen una mayor probabilidad de insertarse informalmente en el mercado de trabajo y tienen en promedio una tasa de desocupación a nivel regional 2,5 p.p. más alta que los varones. Dicha brecha en el Cono Sur oscila entre 1,5 p.p. para Argentina y más de 3 p.p. para Uruguay y Brasil. Este punto de partida pone de manifiesto que las crisis impactan sobre el mercado de trabajo[39] afectando de manera desigual a varones y mujeres.

Como resultado de la crisis se espera que las mujeres sufran en mayor medida la pérdida de sus trabajos y una mayor exposición a la informalidad. También se evidencia una sobrecarga de tareas, dado que están sobrerrepresentadas en dos de las actividades más demandadas por la emergencia sanitaria: la salud y los cuidados.

La profundización de las brechas de géneros en el mundo del trabajo

El ámbito laboral reproduce roles diferenciales para varones y mujeres. Existen grandes disparidades entre la participación según los sectores de actividad, resultado de la segregación horizontal. Algunos sectores se ven más afectados por la cuarentena y en riesgo de contagio que otros. En términos generales, el mayor porcentaje de mujeres se concentra en los servicios más afectados: comunitarios, sociales y personales, salud y trabajo de casas particulares.

Además, con el aislamiento preventivo las mujeres asumen una carga de cuidados extraordinaria dentro de su círculo familiar. El tradicional reparto desigual del tiempo al interior del hogar sumado al cierre temporal de escuelas y otros espacios de cuidado aumentan las horas dedicadas a estas actividades. Esta circunstancia puede ser incompatible con su trabajo tal y como está organizado actualmente y exige mayores medidas para aliviar la carga de cuidado de las familias.

Queda en evidencia la importancia y la centralidad del trabajo reproductivo -de cuidados- para el sostenimiento de la vida. También toma relevancia la falta de reconocimiento de esta actividad en las economías de la región, dado que no es considerada como un componente del desarrollo de los países.

El trabajo en casas particulares

A nivel latinoamericano el sector de trabajo de casas particulares agrupa alrededor de 10 millones de personas. La mayoría son mujeres y representan el 11,4% del total de las mujeres ocupadas. En 2016, la OIT ya estimaba que la informalidad en ese sector afectaba al 80% de las trabajadoras (OIT, 2016). Esas evaluaciones no se revirtieron y

[38] Véase Barcena A y Pinheiro V. "El trabajo en tiempos de pandemia: Desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19). OIT/CEPAL. Mayo 2020.

[39] Según la OIT la informalidad para el año 2018 en América Latina afectaba al 54,3% de las mujeres trabajadoras y al 52,3% de los varones.

hoy concentran los mayores índices de vulnerabilidad como consecuencia de varios factores: la ausencia o insuficiencia de regulación, la debilidad en su poder de asociación y/o sindicalización para negociar colectivamente mejores condiciones, y la falta de valorización social para el tipo de trabajo.

La pandemia puso en primer plano dicha vulnerabilidad. En primera instancia porque estas trabajadoras sufren la sobrecarga en el trabajo de cuidados que realizan en su propio hogar. Tareas que se concentran principalmente en la higiene de los espacios hogareños y en los cuidados de personas dependientes. En segunda instancia porque se instala una situación de incertidumbre laboral y un futuro difuso en relación con sus empleos: no pueden asistir a sus lugares de trabajo por las restricciones a la circulación y tampoco pueden realizar su tarea a distancia. Un alto porcentaje no cuenta con contratos laborales formales, por lo que el riesgo a perder el empleo es cada día mayor. Y en último lugar, las competencias que requieren los cuidados específicos de salud frente al virus no siempre están presentes en este grupo de trabajadoras, lo cual puede exponerlas más fuertemente a situaciones de contagio.

Cambiando la rama de actividad, merecen una mención especial el conjunto de trabajadoras que realizan su labor en el sector de la salud. Esta actividad está altamente feminizada y en el contexto de pandemia aumentó su centralidad. Aquí la profundización de las desigualdades también es grave, antes de la pandemia las trabajadoras ya contaban con índices altos de informalidad y ahora atraviesan extensas jornadas laborales sin poder compatibilizarlas con el cuidado de sus hogares y se encuentran expuestas a mayores posibilidades de contagio.

Entre el teletrabajo y el cuidado multiplicado

En los países que implementaron el aislamiento asistimos a una agudización de la crisis de los cuidados y sus consecuencias se observan principalmente en la reconfiguración de los espacios tradicionalmente separados: se diluye la línea divisoria entre trabajo remunerado y no remunerado. De esta manera, asume un fuerte protagonismo el trabajo de cuidados al interior de los hogares combinado con el trabajo a distancia o teletrabajo.

Según la OIT, en las Américas el tiempo de trabajo no remunerado de las mujeres es mucho mayor que el tiempo que dedican los varones a estas mismas actividades. Las mujeres dedican 4.5 horas diarias promedio al trabajo doméstico, mientras que los varones 2.6 [40]. Como ya se mencionó, en el contexto de pandemia y confinamiento esa carga se eleva debido al cierre de escuelas, espacios públicos y servicios de cuidados que permiten delegar la actividad en otros dispositivos. Se profundiza así una doble limitación: disminuye la participación de las mujeres en actividades económicas remuneradas y a su vez condiciona fuertemente su autonomía económica.

[40] Véase el document de la OIT (2018) "Global Wage Report 2018/2019. What lies behind gender pay gaps". International Labour Office, Geneva.

Finalmente, las mujeres experimentan una mayor dificultad para compatibilizar el trabajo doméstico no remunerado con las nuevas modalidades de trabajo desarrolladas para dar continuidad a la actividad en el contexto de confinamiento en los hogares. Por un lado, si antes de la pandemia el cumplimiento de ambas tareas ya era problemático, la sobrecarga de trabajo reproductivo no remunerado hace aún más difícil que las mujeres que tienen un trabajo formal con posibilidades de realizarlo a distancia puedan llevarlo a cabo. Por otro lado, dada la mayor vulnerabilidad en la inserción laboral, muchas mujeres se encuentran rápidamente con la suspensión de la actividad laboral por tratarse de trabajos que no pueden realizarse a distancia (generalmente trabajos no profesionales y con menor acceso a la tecnología), lo cual amenaza de inmediato su percepción de ingresos y el bienestar de sus hogares.

Algunas reflexiones finales

Es importante comprender que antes de la pandemia del COVID-19 los mercados de trabajo de la región ya eran muy desiguales entre los géneros, situando a las mujeres en una posición de mayor vulnerabilidad con respecto a los varones. Por ello, las medidas de confinamiento social y de cese de actividades produjeron consecuencias más profundas para las mujeres.

La desigualdad se consolida porque hace décadas que las mujeres de América Latina y el Caribe tienen mayores índices de informalidad laboral y desocupación, y la sobrecarga de trabajo no remunerado les impide alcanzar la autonomía económica y gozar de todos los derechos laborales vigentes.

Así recibe la región esta pandemia. Conforme su prolongación en el tiempo será necesario que los gobiernos nacionales aumenten sus esfuerzos en la implementación de políticas públicas que pongan el foco en los grupos más vulnerados y se concentren en la generación de marcos normativos e institucionales que mejoren la protección sociolaboral a futuro.

Las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria sobre las mujeres migrantes, las trabajadoras de casas particulares, las trabajadoras del sector de la salud, las cuidadoras, las trabajadoras informales y también aquellas que trabajan de manera no remunerada en sus hogares exigen para este tiempo acciones coordinadas a nivel nacional, regional y mundial que garanticen la vida en igualdad de condiciones para toda la población.

EL TRABAJO EN CUARENTENA: POLÍTICAS LATINOAMERICANAS FRENTE AL COVID-19

EL TRABAJO EN CUARENTENA: POLÍTICAS LATINOAMERICANAS FRENTE AL COVID-19

La crisis económica y social producida por el Covid-19 no cuenta con precedentes en la historia mundial contemporánea. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su reporte de mayo, en el segundo trimestre de 2020 habrá una reducción del empleo mundial de alrededor del 10,7%. Esto equivale a 305 millones de trabajadores/as a tiempo completo[41].

Las características de la crisis son anómalas, aun luego de controlar (si es posible) la enfermedad viral, las problemáticas económicas y sociales se agudizarán. El efecto de la suspensión de muchas actividades productivas conllevará grandes pérdidas de puestos de trabajo y de ingresos. Es esperable que Latinoamérica afronte más dificultades para paliar las consecuencias de la crisis, dada la vulnerabilidad de sus economías, la estructura productiva, las brechas de desigualdades sociales y la composición del mundo laboral.

Respecto de este último punto, cabe resaltar algunos rasgos comunes de la arquitectura laboral de los países de América Latina y el Caribe, de acuerdo con estimaciones de la CEPAL y la OIT[42]. En primer lugar, el incremento de la tasa de desocupación regional con respecto a 2018, promediando el 8,1% en 2019. En segundo lugar, la gran proporción de empleo informal, cuya tasa ronda el 54% en la región para ese mismo año. En tercer lugar, la tendencia alcista del cuentapropismo respecto al empleo asalariado, que modifica la composición del empleo. Estos factores configuran un universo de trabajadores/as desprotegidos/as, complejizando el abordaje desde las políticas públicas para brindar mecanismos de sostenimiento del empleo, protección social y transferencias de ingresos.

La pandemia instaló algunos dilemas nuevos sobre la forma en que se realizan las tareas laborales y reconfiguró, en muchos casos, la manera de vincularse entre trabajadores/as. Uno de ellos es la incorporación de normas de seguridad y salud laboral, principalmente en sectores esenciales como la salud o provisión de alimentos, pero también en la actividad económica general[43]. Otra de las disyuntivas es la

[41] Véase el Comunicado de la OIT, disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_745965.pdf

[42] Véase el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Organización Internacional del Trabajo (OIT), "El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19)", Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, Nº 22 (LC/TS.2020/46), Santiago, 2020.

[43] Esto implica comprender que algunas prácticas llegaron para quedarse por un largo tiempo y que se requiere de la confección de protocolos adecuados en las diferentes ramas de actividad, sobre la base del diálogo social. Estos protocolos tienen que contemplar, entre otros aspectos, las medidas necesarias de distanciamiento físico, las condiciones óptimas de los establecimientos, el traslado de personas hasta sus lugares de trabajo y la formación de trabajadores/as para su correcta

implementación en el sector público y privado de modalidades como el trabajo a distancia, teletrabajo o trabajo remoto, con el fin de continuar las actividades laborales manteniendo las medidas de aislamiento social. A pesar de ser una solución posible a la continuidad laboral, la OIT estima que en promedio sólo un 23% de los/as trabajadores/as de América Latina podrían realizar sus tareas bajo esta modalidad[44].

Por último, se plantea el dilema sobre la protección del trabajo, los ingresos y la producción. Muchos países latinoamericanos diseñaron e implementaron medidas con esta finalidad. En algunos casos, implicó el rediseño de herramientas existentes para adecuarlas al escenario de crisis y, en otros, requirió del desarrollo de nuevas políticas públicas. A continuación, se repasarán brevemente estas medidas, que se engloban en dos grandes objetivos: por un lado, el sostenimiento de la producción y el empleo mediante el pago de salarios correspondientes a las empresas; y por otro lado, las políticas de apoyo a los ingresos y a la protección social mediante el aumento de las transferencias directas a la población. Se tendrán en cuenta las experiencias de Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile y Perú, a partir de información relevada de las páginas oficiales de los gobiernos, y la normativa que enmarca dichos instrumentos[45].

Políticas de sostenimiento del empleo y apoyo a las empresas

La asistencia a las empresas en la región se enfocó principalmente en dos ejes: crédito a las empresas y subsidio a los salarios. Respecto de la primera política, consiste en el otorgamiento de créditos a tasas bajas y condiciones flexibles para mitigar los previsibles quiebres en la cadena de pagos. En proporción al Producto Bruto Interno (PBI), los países de la Alianza del Pacífico son los que más han apelado a esta política, destacándose Chile, Perú, y en menor medida Colombia y México.

Chile es el país que más ampliamente está aplicando dicha política, con una línea de crédito de hasta 24 mil millones de dólares, lo que representa el 8% de su producto anual, con 6 meses de gracia y a tasas preferenciales, aunque en este caso sin condicionalidades respecto del mantenimiento del empleo. Perú, por su parte, otorgó un total de 8 mil millones de dólares (más de 3% del PBI) a través de su Banco Central a una tasa del 1,25% anual. En Colombia el volumen de préstamos otorgado supera los 5 mil millones de dólares, y pueden aplicar empresas grandes además de las pymes.

implementación. Estos factores son esenciales para avizorar una recuperación económica que cuide la salud de las personas.

[44] Véase el informe de la OIT (2020). "Working from home: a potential measure for mitigating the COVID-19 pandemic", Policy Brief, Ginebra, abril.

[45] Nota Aclaratoria: la información respecto de las políticas que aplican los diferentes países ante la pandemia es dinámica, en este informe se registran características y composición de las diversas medidas hasta el 31 de mayo del 2020.

Finalmente, México apuntaló a microempresas y emprendedores con créditos de alrededor de mil dólares cada uno para casi 3 millones de personas humanas y jurídicas. La inversión se limitó a un 0,3% del PBI destinados principalmente al sostenimiento del empleo, puesto que para recibir la ayuda es requisito abstenerse de realizar despidos mientras dure la pandemia. El limitado alcance de esta medida está siendo suplementado por políticas de crédito a pymes, llevadas adelante por varios estados subnacionales como la Ciudad de México y los Estados de México, Jalisco, Puebla, Nuevo León, entre otros.

Brasil comprometió fondos a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) por 7 mil millones de dólares (alrededor de 0,5% de su PBI). El aporte va destinado a un millón de pequeñas y medianas empresas, a tasa de interés normal, pero con seis meses de gracia para su devolución. La Argentina, por su parte, destina 500.000 millones de pesos (7 mil millones de dólares, un 1,5% del PBI) a créditos a tasa real negativa, cuyos beneficiarios serán no sólo empresas sino también trabajadores autónomos.

El segundo eje de políticas, más predominante en los países del Mercosur, consistió en el pago de parte de los salarios del sector privado con fondos del Estado, de modo de paliar no solamente la situación financiera de las empresas, sino también los ingresos de sus trabajadores y trabajadoras formales. Brasil es el país que destinó mayor cantidad de fondos, más de 10 mil millones de dólares, al pago de salarios del sector privado. La Argentina, en tanto, pagó salarios por al menos 30 mil millones de pesos mensuales (440 millones de dólares), bajo condición de que las empresas no adquirieran moneda extranjera ni repartieran dividendos durante este año. Además, se decretó la prohibición de efectuar despidos sin justa causa, por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor durante la cuarentena.

En la Alianza del Pacífico, a diferencia del Mercosur, la financiación de esta política proviene de fondos de ahorro para cesantías y jubilaciones, los cuales se utilizarán para cubrir parte de los salarios de los trabajadores formales. En Chile se destinaron hasta 11 mil millones de dólares (3,7% del PBI) para completar el salario de trabajadores con suspensiones parciales o totales. Perú, en tanto, habilitó hasta 1.250 millones de dólares en fondos de desempleo a discreción de cada trabajador. Colombia resultó una excepción en la región, ya que el presupuesto de 500 millones de dólares mensuales para cubrir hasta el 40% de los salarios del sector formal, provendrá directamente de las arcas del Estado.

Finalmente, todos los países mencionados han establecido moratorias en el pago de impuestos, lo cual configura una fuente adicional de financiamiento para las empresas, más allá del efecto que vaya a tener en la recaudación tributaria de cada país.

Políticas de transferencia de ingresos y protección social

Ante la caída de la actividad económica, una de las principales cuestiones a afrontar fue la garantía de un piso mínimo de ingresos y protección social en la población.

Algunos Estados contaban con un seguro por desempleo antes de la crisis, que brindaba cobertura a trabajadores/as formales en caso de perder su fuente de trabajo. En Argentina, Chile y Ciudad de México, por ejemplo, optaron por ampliar o reforzar estos instrumentos.

No obstante, los altos niveles de informalidad laboral en la región precisaron el diseño, con suma urgencia, de nuevos instrumentos que contemplaran a trabajadores/as no protegidos/as por las relaciones asalariadas formales. Algunas de estas políticas establecieron como criterio el nivel de ingreso de los hogares, más allá de la condición de los/as trabajadores/as, estipulando un esquema de transferencias monetarias no condicionadas.

En el caso de la Argentina, se otorgaron refuerzos monetarios a políticas ya existentes que garantizaban la protección social e ingresos de una gran parte de la población, como las jubilaciones, las pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros programas sociales. Además, se diseñó un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)[46] destinado a trabajadores/as desocupados/as, informales, cuentapropistas de las categorías más bajas, y personal de casas particulares independientemente de su condición de registro en la seguridad social. La medida se otorgó a un solo miembro del hogar según una serie de incompatibilidades, como la percepción por parte de algún integrante del grupo familiar de ingresos provenientes de un trabajo registrado, u otras prestaciones sociales. Además, el Estado realizó una evaluación socioeconómica antes de otorgar el beneficio. En el caso de los y las titulares de la AUH perciben, además del monto de la asignación, la prestación estipulada en el IFE.

En Chile se aprobó un Ingreso Familiar de Emergencia[47], destinado a hogares que vieron disminuidos sus ingresos en el contexto de la pandemia. Esta ayuda económica se extiende a personas incluidas en programas sociales como el Subsidio Único Familiar (SUF), familias del Subsistema Seguridades y Oportunidades (SSyOO) y hogares con ingresos informales que se encuentran dentro del 60% más afectado por la crisis, según un indicador de emergencia estipulado. El ingreso se brinda durante uno, dos o tres meses (dependiendo del momento de la postulación), y el monto se va reduciendo gradualmente a la espera de que los hogares recuperen sus fuentes de ingresos. A partir del segundo y tercer aporte, este ingreso incorpora a familias con adultos/as de más de 70 años que poseen una Pensión Básica Solidaria por Vejez, según ciertas características de la composición socioeconómica del hogar.

En Colombia se instituyó un Ingreso Solidario[48] para otorgar una transferencia monetaria a trabajadoras/as informales y hogares en situación de pobreza y

[46] Véase el portal oficial, disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/if-2020-19464467-apn-dnarssmsyds.pdf

[47] Véase el portal oficial, disponible en: https://www.ingresodeemergencia.cl/requisitos

[48] Véase el portal oficial, disponible en: https://ingresosolidario.dnp.gov.co/documentos/DECRETO_518_DEL_4_DE_ABRIL_DE_2020.pdf

vulnerabilidad que no perciban otra ayuda económica brindada por el Estado. Abarca los programas Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción y Devolución del IVA. La selección de los hogares se realiza de acuerdo con una clasificación de condiciones socioeconómicas desarrollada por el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales de dicho país.

En Perú se estableció el denominado Bono Yo me Quedo en Casa[49], que destina una ayuda económica a hogares urbanos en situación de pobreza, localizados en ámbitos geográficos con un mayor riesgo sanitario. Para acceder al beneficio, es necesario encontrarse dentro de la clasificación de pobre o pobre extremo en el padrón del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). Asimismo, se dictaminó el Bono Rural[50], que estipula una transferencia monetaria destinada a hogares rurales en condición de pobreza, que no perciben otra ayuda económica de programas sociales o medidas adoptadas por el Estado en el marco de la emergencia nacional. También se implementó el Bono Independiente[51], destinado a trabajadores/as independientes que cumplan con una serie de requisitos respecto de la composición socioeconómica y localización geográfica de sus hogares.

En Brasil se implementó una Ayuda de Emergencia[52], un beneficio para trabajadores/as informales, microemprendedores/as individuales (MEI), trabajadores/as independientes y desempleados/as que se pagará durante tres meses cubriendo hasta dos miembros del grupo familiar. En los casos de mujeres jefas de hogar la ayuda económica se duplica. Este beneficio no es compatible con prestaciones de la seguridad social, ingresos por otros programas sociales federales o empleo formal. A su vez, se establecieron una serie de criterios en torno a los ingresos individuales y familiares como requisito para el acceso. En el caso de quienes perciben transferencias monetarias por el programa Bolsa Familia, una de las políticas sociales de mayor alcance en Brasil, pueden optar por recibir la Ayuda de Emergencia, pero se suspende durante ese período el beneficio del Bolsa Familia.

El desarrollo de este tipo de políticas abre interrogantes respecto de su sostenibilidad y extensión en el tiempo, ya que fueron diseñadas como medidas de contención en el marco de la emergencia sanitaria y las consecuencias socioeconómicas. A su vez, pone en entredicho las capacidades estatales para dar respuesta rápida a la población ante la urgencia del contexto. En este punto los países han encontrado diferentes

[49] Véase el portal oficial, disponible en: https://www.gob.pe/8782-acceder-al-bono-yo-me-quedo-en-casa

[50] Véase el portal oficial, disponible en: https://www.gob.pe/9070-acceder-al-bono-rural

[51] Véase el portal oficial, disponible en: https://www.gob.pe/8883-consultar-si-te-corresponde-el-bono-independiente

[52] Véase el portal oficial, disponible en: https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio

obstáculos, dependiendo de la coordinación o superposición con otras políticas sociales, y de la arquitectura institucional previa que permitió, en algunos casos, tener mayor o menor alcance y celeridad.

Pandemia y después

Los gobiernos debieron emprender múltiples políticas para contener el impacto generalizado de la pandemia sobre la producción, el empleo y los ingresos de la población, enfrentándose con la característica heterogeneidad del mundo del trabajo en América Latina. Esta situación abre dos dimensiones de análisis e interrogantes.

Por un lado, en un contexto de creciente desigualdad socioeconómica, el coronavirus deja al descubierto una situación estructural: gran parte de los/as trabajadores/as latinoamericanos/as no cuentan con protecciones sociales y derechos laborales básicos. Trabajadores/as desocupados/as, cuentapropistas que viven con el ingreso del día a día, trabajadoras de casas particulares en la informalidad, trabajadoras/es de la salud precarizados/as, y asalariados/as no registrados/as que corren el riesgo de ser despedidos. La crisis generada por la pandemia ha visibilizado y profundizado, aún más, las dificultades que gran parte de la población ya tenía para sobrevivir. Como consecuencia, la crisis reinstala el debate de la focalización-universalidad de las políticas sociales, y la necesidad de pensar en esquemas integrales con medidas que se complementen y coordinen para poder dar respuestas que garanticen la vida en igualdad de condiciones para todos y todas.

Por otro lado, se plantean interrogantes en torno a la disponibilidad de recursos: ¿cómo se financia la intervención estatal para enfrentar la crisis del COVID-19? ¿con qué respaldo económico cuenta cada uno de los Estados?

Las políticas descriptas representan un esfuerzo financiero importante, tanto por la erogación de recursos como por la merma en la recaudación fiscal producto de la recesión. En la mayoría de los casos, los Estados han recurrido al endeudamiento interno para hacer frente al déficit fiscal resultante de la crisis económica. Para ello han estipulado baja de tasas de interés facilitando el acceso al crédito para el Estado y los privados que lo requieran, como fue oportunamente descripto. Chile y Perú, por ejemplo, recurrieron a la riqueza nacional acumulada en los fondos de pensiones y desempleo para financiar políticas destinadas a los sectores trabajadores. En el caso de Chile también recurrió al endeudamiento externo a través de un crédito del Fondo Monetario Internacional por 23.800 millones de dólares, monto récord para el país trasandino. Por su parte, Brasil y Colombia accedió al mercado financiero internacional al emitir bonos en dólares por 3.500 y 2.500 millones de dólares respectivamente, en ambos casos a baja tasa de interés.

La situación argentina, en tanto, presenta la particularidad de enfrentar la recesión en un contexto de renegociación de su deuda externa. En el mes de mayo el Estado comunicó su propuesta de canje de deuda en dólares por 66.238 millones, de los cuales 4.500 millones corresponden a vencimientos del corriente año. Estos compromisos,

imposibles de afrontar de forma sustentable, evidencian que el Estado tiene vedadas todas las posibilidades de endeudamiento externo para hacer frente a la crisis actual. Es por ello que debe erogar recursos con los que no cuenta, lo que agrava la posición de negociación frente a los acreedores internacionales. Esta situación de debilidad a causa del elevado endeudamiento en moneda extranjera implica que las acciones de política monetaria (en concreto, la baja de tasas de interés y la consecuente emisión monetaria) puedan provocar desequilibrios en el mercado financiero, generando consecuencias negativas para la economía argentina.

El hecho ineludible es que cuando se logre controlar la pandemia, los problemas estructurales de la región seguirán presentes. Será entonces momento de convocar a todos los actores sociales que están participando activamente en la contención de la crisis (organizaciones sociales, sindicatos, empresas y los diferentes niveles estatales). Es esencial reconstruir el tejido social y pensar un nuevo orden en el mundo del trabajo, teniendo como eje vertebrador la protección de los trabajadores y las trabajadoras.

LA PANDEMIA: UNA OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

LA PANDEMIA: UNA OPORTUNIDAD PARA

EL DESARROLLO SOSTENIBLE

En los últimos meses todos los indicadores ambientales mejoraron, dándole un breve respiro al ecosistema mundial. Pero esto no fue resultado de acciones deliberadas contra el cambio climático, ni una búsqueda de eficiencia en recursos o el cambio de hábitos de consumo. La causa fue la caída de la actividad económica debido a la pandemia del coronavirus, frente a la cual muchos países aplicaron cuarentenas obligatorias.

Los datos de mayo muestran que, tras el control de los contagios y la recuperación de la actividad económica en muchos países europeos y asiáticos, los niveles de contaminación volvieron al estado pre-pandemia. Esta situación pone en evidencia el impacto de los modos de producción sobre el medio ambiente.

La necesidad de transitar hacia modelos de desarrollo más sostenibles debe ser la enseñanza que nos deje esta situación de emergencia. Cada país, según su responsabilidad ambiental, debe encontrar un equilibrio entre producción, consumo y conservación del ambiente. Poniendo al Estado como actor principal de este cambio para romper la dicotomía ambiente versus trabajo. América Latina y particularmente la Argentina, deben aprovechar la crisis para implementar políticas públicas de desarrollo que generen empleo de calidad y una sociedad más igualitaria y sustentable.

Para "no volver atrás" es necesario impulsar un cambio cultural en la forma de relacionarnos con el ambiente, que implique modificar hábitos de producción y consumo.

El impacto ambiental y económico de la pandemia

Con el avance de la pandemia y las cuarentenas en gran parte del mundo se observó un mejoramiento de los indicadores ambientales a nivel global. Según Carbon Brief[53] las emisiones de dióxido de carbono (CO_2) cayeron un 17%. En China, principal país emisor de gases de efecto invernadero, la caída fue del 25% durante las semanas de mayores restricciones. En la Argentina, imágenes satelitales registradas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), muestran menor presencia

[53] Véase el artículo de Carbon Brief, disponible en: https://www.carbonbrief.org/analysis-coronavirus-has-temporarily-reduced-chinas-co2-emissions-by-a-quarter

de dióxido de nitrógeno en las principales ciudades: Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y San Miguel de Tucumán[54].

También se registró una importante merma en la generación de residuos. Según la Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA por sus siglas en inglés), la generación de residuos en Bogotá, capital de Colombia, bajó un 25%, y en Guadalajara, segunda ciudad más poblada de México, un 15%. En el área metropolitana de Buenos Aires cayó un 34%[55].

Sin embargo, estos indicadores ambientales son resultado de la caída de la producción a nivel mundial. El consumo de energía eléctrica, sinónimo del nivel de actividad económica, cayó un 20% durante parte de febrero y marzo en muchos países[56]. La demanda mundial de petróleo cayó en el primer trimestre del año un 5% interanual, cuando aún la pandemia no había llegado con fuerza a Estados Unidos. El consumo de carbón también sintió una fuerte contracción del 8%, y el gas un 2%. En Argentina la demanda de energía eléctrica disminuyó en abril un 11,5% interanual y un 23,4% respecto a marzo[57]. Las ventas de nafta y gasoil lo hicieron en un 14% y 32% respectivamente durante el mes de marzo, teniendo como resultado la menor producción de petróleo y gas, con caídas del 8,5% y 6% interanual en abril.

Esta momentánea mejora en el medioambiente vino acompañada de una paradoja en lo social: el empeoramiento de la calidad de vida de millones de personas. Nunca se habían registrado caídas de tantas variables económicas y sociales en tan poco tiempo. La CEPAL[58] estima que la economía argentina y la ecuatoriana caerán en 2020 un 6,5%, y la de Chile, Perú y Uruguay un 4%. El derrumbe de la economía impactará fuertemente en los indicadores sociales. Según evaluaciones de la OIT y la CEPAL[59] la desocupación en América Latina subirá del 8,1% al 11,5% este año, equivalente a 11,5 millones de nuevos desempleados. La pobreza aumentará 4,4% alcanzando a 214,7 millones de personas, y la pobreza extrema un 2,6%, lo que representa a 83,4 millones de personas. La deuda social que dejará esta pandemia no será neutralizada por una

[54] Véase el portal oficial, disponible en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/baja-la-contaminacion-atmosferica-en-grandes-ciudades-de-la-argentina

[55] Véase el artículo de la International Solid Waste Association, disponible en: https://www.iswa.org/home/news/news-detail/article/covid-19-update-latin-america/109/

[56] Véase el reporte de la Agencia Internacional de la Energía, disponible en: https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020

[57] Publicado en diario Ámbito el 18 de mayo de 2020, disponible en: https://www.ambito.com/economia/energia/advierten-que-la-demanda-electricidad-abril-sufrio-su-caida-mas-importante-20-anos-n5103448

[58] Véase el documento de la CEPAL, disponible en: https://www.cepal.org/sites/default/files/pr/files/tabla_prensa_proyecciones_pib-2020-esp.pdf

[59] Véase la publicación de la CEPAL, disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/45557-coyuntura-laboral-america-latina-caribe-trabajo-tiempos-pandemia-desafios-frente

mejor performance de los indicadores ambientales. La sociedad necesita de un equilibrio entre ambiente y trabajo.

Superar la grieta ambiente versus trabajo

Deliberado o no, el desarrollo sostenible se presenta en general bajo dicha dicotomía. La misma supone que a mayores estándares ambientales aumenta el riesgo para el trabajo actual y futuro de las personas.

Este planteo está vigente tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo. Sin embargo, las capacidades y herramientas de los Estados para hacer cumplir la normativa ambiental y, al mismo tiempo, crear y mantener trabajo de calidad son distintas en ambos casos. También hay diferencias culturales y diversas formas de relacionarse con el ambiente y la producción, en especial en aquellas zonas donde hay pueblos originarios. Por lo tanto no es posible hablar de un solo modelo de desarrollo sostenible.

Es necesario que el mundo supere la dicotomía ambiente versus trabajo. No es verdad que cuidar o preservar el ambiente implique directamente la destrucción de puestos de trabajo. Existen y son posibles otras formas de producción con menor impacto ambiental. Si bien todos los países deben transitar hacia un cambio de paradigma de la producción, el consumo, y la forma de relacionarse con el ambiente, algunos generan un impacto ambiental global mayor que otros comparado por cantidad de habitantes. Y son estos los que deben ponerse a la vanguardia del cambio.

Cada sociedad deberá encontrar su propio equilibrio entre consumo de recursos naturales, afectación al ambiente y bienestar general, siempre en función de su responsabilidad ambiental para con el planeta.

Más sostenible es más Estado

El Estado tiene la obligación de mediar y encontrar puntos de equilibrio entre las actividades productivas y las poblaciones potencialmente afectadas, con el fin de preservar el ambiente y al mismo tiempo generar puestos de trabajo que contribuyan a mejorar los indicadores sociales del país.

En la Argentina sería dificultoso transitar hacia un modelo de desarrollo más sustentable sin dotar al Estado de mayores capacidades y una mayor regulación de la economía. Es imperante fortalecer técnica y económicamente a las autoridades ambientales nacionales y provinciales para lograr una mayor capacidad de acción e independencia respecto a los controlados. El Estado también debe poder ordenar el desarrollo económico participando directamente en sectores productivos estratégicos. Por medio de regulaciones e incentivos debe incidir en las formas de producción y comercialización, por ejemplo, implementando lo que se conoce en

materia de envases como responsabilidad extendida del productor: hacer responsable al sector productivo de gestionar integralmente los envases de sus productos promoviendo, entre otros aspectos, la reducción de la cantidad de envases y embalajes utilizados, y su reciclado y reinserción en las cadenas productivas.

Siguiendo en el sector de reciclado, la cuarentena visibilizó la informalidad en la que miles de cartoneros y cartoneras prestan sus servicios ambientales. Además de hacer estragos en sus ingresos, toneladas de materiales reciclables terminaron en los basurales de todo el país. Avanzar hacia la formalización de este servicio, a la par de la recolección de residuos formal, es fundamental para la industria del reciclado. El Estado debe desarrollar una política pública clara que incentive y apoye al sector garantizando plenos derechos los trabajadores y las trabajadoras.

Otra oportunidad radica en la banca pública como herramienta para financiar proyectos que, además de cumplir con las condiciones tradicionales de un crédito, cuenten con una contraprestación positiva en el ambiente. En este mismo sentido, el Estado debe ser quien potencie a escala nacional las iniciativas y procesos productivos con triple impacto (económico, social y ambiental), hoy sólo presentes en pequeños y aislados emprendimientos.

También puede ser tiempo de lanzar una nueva política de ordenamiento territorial y de movilidad urbana en grandes ciudades que contribuya a disminuir la emisión de gases y la contaminación acústica. La descentralización territorial de actividades económicas y administrativas es fundamental para lograr un desarrollo más equitativo y una desconcentración poblacional. Un mejor sistema de transporte público contribuiría a la menor utilización de automóviles, y el desarrollo de infraestructura vial para el uso de bicicletas incentivaría su uso para viajes cortos.

La participación de todos los actores sociales (empresas, sindicatos, universidades, partidos políticos, organizaciones populares y de la sociedad civil) es fundamental para que estas y otras propuestas tengan éxito, aunque sólo podrán materializarse con la efectiva coordinación y direccionalidad del Estado.

Cambio cultural para no volver a "lo habitual"

Hacia fines de mayo, algunos países y ciudades del mundo del hemisferio norte volvieron al ritmo pre-pandemia. Las empresas y personas comenzaron a circular, a producir y consumir. Análisis recientes de China y las principales ciudades europeas muestran que la tendencia de generación de gases de efecto invernadero volverá rápidamente a valores de 2019 o incluso superiores[60].

De acuerdo con la baja de los indicadores ambientales, es claro que la contaminación de nuestro planeta es resultado de la forma en la que producimos y consumimos.

[60] Véase el reporte de Energy and Clean Air, disponible en: https://energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2020/05/China-air-pollution-rebound-final.pdf

Pero el freno de la actividad económica mundial también evidenció que sin producción y sin intervención del Estado millones de personas son empujadas a la pobreza. Se necesitan cambios económicos pero también culturales. El progreso y el éxito de las sociedades deben dejar de estar atados a la mayor producción y consumo.

Este cambio de paradigma no es idealista ni ingenuo. Diversas acciones muestran que con regulaciones, incentivos y sanciones se pueden generar transformaciones en la producción y el consumo, que contribuyan al bienestar económico de las sociedades y al mismo tiempo preserven el ambiente.

En la Argentina, un caso relativamente reciente y exitoso es la prohibición en muchas ciudades del expendio gratuito de bolsas plásticas de un solo uso en comercios. El impacto de esta medida en la generación de residuos fue contundente: antes de eso sólo en la ciudad de Buenos Aires se usaban 500 millones de bolsas por año[61]. Pero además de las consecuencias positivas en materia ambiental, la decisión fue una muestra de la capacidad del Estado para intervenir y guiar las formas de producción y comercialización para preservar el ambiente. A nivel productivo se pueden mencionar las experiencias de los pueblos cordobeses de Ticinos y Las Junturas, en los que se construyeron plantas de generación de energía eléctrica (de propiedad mixta) a base de la combustión de cáscara de maní, un recurso antes desechado.

Los cambios de hábitos en el consumo y de las formas de producir nos llevarán a la construcción de una sociedad más sustentable. La relación con el ambiente debe ser distinta para no volver a "la forma habitual" en la que sólo es un recurso económico a explotar. El único camino posible es que el Estado guie esta transformación de la mano de todos los sectores de la sociedad, encontrando equilibrios para la búsqueda de un modelo de desarrollo más sustentable, federal y justo.

[61] Véase el portal oficial, disponible en:
https://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/residuos/bolsas

FUNDACIÓN EMBAJADA ABIERTA

ATENEA CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO NACIONAL